

2. Negociaciones de paz en África

- A lo largo del año 2017 se identificaron 20 procesos y negociaciones de paz en el continente africano, lo que supone prácticamente la mitad (46%) de los 43 procesos de paz señalados a nivel mundial en 2017.
- 12 de los 20 procesos de paz se dieron en contextos de conflicto armado mientras que los restantes ocho procesos tuvieron lugar en el marco de escenarios de tensión y crisis sociopolíticas.
- En la mayoría de los casos (nueve) los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y los grupos insurgentes.
- De los 20 procesos de paz analizados, existían tres escenarios de negociación en el continente africano sin terceras partes, los dos procesos en los que está inmersa Nigeria (Delta del Níger y Boko Haram) y en la República del Congo.
- De los 17 casos de negociaciones y procesos de paz identificados en el continente africano en los que participaban terceras partes, en 11 de ellos la UA estuvo presente en solitario (en cuatro casos) o colaborando con la ONU (en siete casos) o junto con organizaciones regionales.
- La liberación o intercambio de prisioneros para promover la confianza entre las partes y contribuir positivamente al proceso en marcha estuvo presente en diversos contextos africanos, como Etiopía (Ogadén), Malí (norte), Mozambique, Nigeria (Boko Haram), República del Congo y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul).
- El estatus político y administrativo de determinados territorios fue uno de los elementos centrales en diversos procesos, como Etiopía (Ogadén), Malí (norte), el contencioso entre Marruecos y el Sáhara Occidental, Nigeria (Delta del Níger), Senegal (Casamance), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul).
- Cabe destacar la evolución positiva de las negociaciones de paz y la consecución de acuerdos en Gambia, Etiopía (Ogadén), Mozambique, Rep. del Congo y entre Sudán y Sudán del Sur.

Este capítulo analiza los procesos y negociaciones de paz de mayor relevancia en África en 2017. En primer lugar, se examinan las características y tendencias generales de los procesos de paz en la región y, en segundo lugar, se analiza la evolución de cada uno de los casos durante el año. Al inicio del capítulo se incluye un mapa en el que se identifican los países del continente africano que fueron escenario de negociaciones durante 2017.

Tabla 2.1. Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en África en 2017

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Burundi	Gobierno, oposición política y social agrupada en el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED)	Yoweri Museveni y Benjamin Mkapa (Comunidad de Estados de África del Este, EAC por sus siglas en inglés); Jamal Benomar, sustituido por Michel Kafando (ONU)
Etiopía (Ogadén)	Gobierno, movimiento político militar ONLF	Mediación de Kenya, facilitación de EAU y Suecia
Gambia	Presidente Adama Barrow, expresidente Yahya Jammeh	ECOWAS, UA, ONU
Libia	Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), Cámara de Representantes (CdR), Congreso General Nacional (CGN)	ONU, Liga Árabe, UA, UE (Cuarteto); Argelia, Egipto, Túnez, Marruecos, EAU, Holanda, Italia, Francia
Malí (norte)	Gobierno, Coordinadora Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA–	Argelia, Francia, ECOWAS, UA, ONU, UE, Mauritania, Níger
Marruecos – Sáhara Occidental	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)	ONU, Argelia y Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Mozambique	Gobierno, grupo opositor RENAMO	Equipo mediador nacional, Botswana, Tanzania, Sudáfrica, Reino Unido, UE, Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano), Iglesia Católica

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Nigeria (Delta del Níger)	Gobierno, Pan-Niger Delta Forum (PANDEF), NIGER Delta Consultative Assembly, (NIDCA), Pan Niger Delta Peoples Congress (PNDPC), Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND)	--
RCA	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka	Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (AU, con apoyo de CEEAC, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, OCU, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Humanitarian Dialogue
RDC	Gobierno, Alianza por la Mayoría Presidencial, oposición política y social agrupada en la coalición Rassemblement (partido Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), la Oposición Dinámica y el G7, entre otros), Union pour la Nation Congolaise y otros partidos políticos	Conferencia Episcopal Congoleña (CENCO), Angola, Tanzania, Uganda, Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, UE, UA, ONU, EEUU, CIRGL, Organización Internacional de la Francofonía
Región Lago Chad (Boko Haram)	Gobierno de Nigeria, Boko Haram (facción Abubakar Shekau), Boko Haram (facción Abu Musab al-Barnawi)	--
Rep. del Congo	Gobierno, milicias Ninjas y el Consejo Nacional de los Republicanos (CNR) de Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi)	--
Senegal (Casamance)	Gobierno de Senegal, grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) y sus diferentes facciones	Comunidad de Sant'Egidio, Gambia, Guinea-Bissau
Somalia	Gobierno Federal de Transición, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes	ONU, IGAD, Turquía
Sudán	Gobierno de Sudán, coalición opositora "Sudan Call" formada por partidos de oposición nacional, Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur)	African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania
Sudán (Darfur)	Gobierno, Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW	UA, UNAMID, Chad
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	Gobierno, SPLM-N	African Union High-Level Implementation Panel (AUHIP), Uganda
Sudán del Sur	Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition, SPLM7, SSDM-Cobra Faction	"IGAD Plus": IGAD, que integra a Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda; UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU
Sudán - Sudán del Sur	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), Egipto, Libia, EEUU, UE
Togo	Gobierno, oposición política y social	Ghana, ECOWAS, UA, ONU

Las negociaciones de paz marcadas en negrita son descritas en el capítulo.
 -- No existen o no hay constancia pública de la existencia de terceras partes.

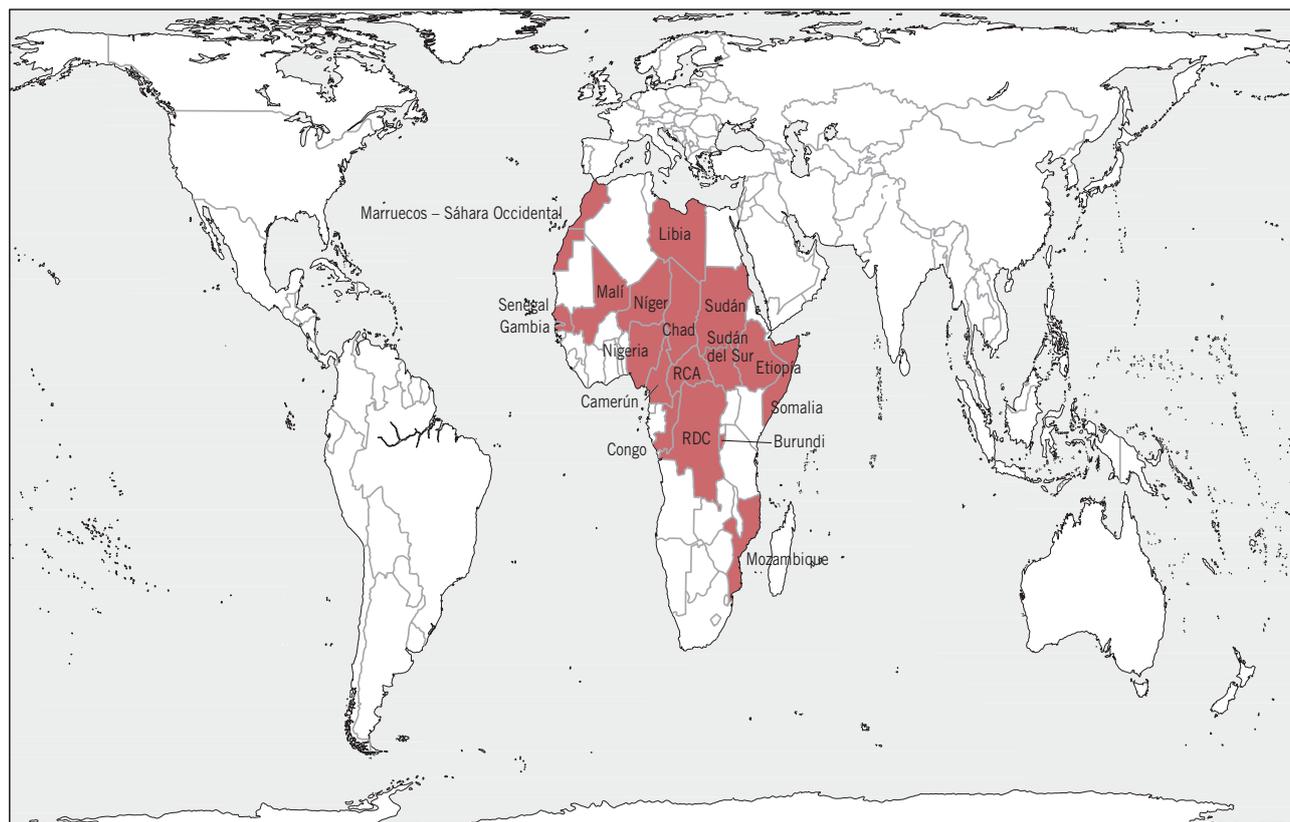
2.1 Negociaciones en 2017: tendencias regionales

A lo largo del año 2017 se identificaron **20 procesos y negociaciones de paz en el continente africano**, lo que supone prácticamente la mitad (46%) de los 43 procesos de paz señalados a nivel mundial en 2017. **12 de estos 20 procesos de paz se dieron en contextos de conflicto armado** mientras que los restantes ocho procesos tuvieron lugar en el marco de escenarios de tensión y crisis sociopolítica. El análisis de los diferentes contextos refleja algunas tendencias relativas a los procesos y negociaciones en el continente africano.

En cuanto a los **actores involucrados en la negociación**, el análisis de los diversos contextos africanos refleja que **en la mayoría de los casos (nueve) los principales protagonistas**

de las negociaciones fueron solamente los gobiernos de los respectivos países y los grupos insurgentes. Este fue el caso de contextos como el de Ogadén –entre el Gobierno etíope y el ONLF–, Mozambique –entre el Gobierno liderado por FRELIMO y el movimiento político-militar RENAMO–, RCA –entre el Gobierno y los diferentes integrantes de la antigua coalición Séléka y milicias anti-balaka–, Nigeria –contactos humanitarios entre el Gobierno y facciones de Boko Haram–, la República del Congo –entre el Gobierno y el movimiento político-militar del reverendo Ntoumi–, la región senegalesa de la Casamance –entre el Gobierno y el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance y sus facciones–, la región sudanesa de Darfur –entre el Gobierno y la insurgencia darfuriana–, las regiones

Mapa 2.1. Negociaciones de paz en 2017 en África



■ Países con procesos y las negociaciones de paz en África en 2017

sudanesas de Kordofán Sur y Nilo Azul – entre el Gobierno sudanés y la insurgencia SPLM-N– y Sudán del Sur – entre el Gobierno y el grupo armado SPLA-IO–. En otros casos, **se observó una diversidad más amplia que abarcó a actores tanto políticos como armados en interlocución con las autoridades gubernamentales.** Fue el caso, por ejemplo, de contextos como el de Malí (norte) –donde el proceso negociador ha involucrado en los últimos años a las autoridades nacionales y a numerosos actores políticos y armados de la región de Azawad (norte)–, Libia –diversos actores político-militares compitiendo por el poder central–, Nigeria (Delta del Níger) –donde el Gobierno ha mantenido contactos con la plataforma de la sociedad civil PANDEF y con algunos actores armados de la región del Delta del Níger–, Somalia –el Gobierno Federal de Transición con los estados federales y con otros actores político-militares del país–, y el proceso de paz en Sudán –entre el Gobierno y la coalición opositora Sudan Call, que agrupa a la oposición política y a los diferentes actores insurgentes de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur–. En otra serie de casos (cuatro) los procesos negociadores han tenido como protagonistas a los respectivos gobiernos con sectores de la oposición política y social del país, como ilustran los casos de Burundi, Gambia, RDC o Togo.

En un importante número de casos los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y actores armados

En un reflejo de las diversas dinámicas de conflicto, las negociaciones y procesos de paz analizados también dan cuenta de otros casos donde los principales interlocutores son los gobiernos de diferentes Estados, en el marco de la disputa que incluyen temas de demarcación fronteriza y el estatus de determinados territorios, en el caso de Sudán y Sudán del Sur. **En otros contextos los participantes en la negociación son principalmente los gobiernos y entidades que pretenden la secesión, buscan un nuevo estatus político y administrativo o que aspiran a ser Estados con pleno reconocimiento internacional.** Entre estos casos se cuenta el de Marruecos-Sáhara Occidental.¹

En lo que respecta a las **terceras partes implicadas en procesos de paz y negociación**, cabe mencionar que si bien hay muchos casos donde se conoce públicamente cuáles son los actores involucrados en tareas de mediación, facilitación y acompañamiento, en otros contextos estas tareas se llevan a cabo de manera discreta y no pública. **De los 20 procesos de paz analizados, existen tres escenarios de negociación en el continente africano sin terceras partes.** Este es el caso de las dos negociaciones que lleva a cabo el Gobierno de Nigeria, por una parte en el conflicto en el Delta del Níger con los diferentes actores político-militares y por otra parte en el

1. La RASD no ha sido reconocida internacionalmente, pero al mismo tiempo el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por la propia ONU como un territorio pendiente de descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no está reconocida por el derecho internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

conflicto en el norte del país y las regiones limítrofes de Camerún, Níger y Chad con la insurgencia yihadista Boko Haram, así como los contactos que ha realizado en Gobierno congolés de Denis Sassou-Nguesso con los emisarios del reverendo Ntoumi. En los restantes 17 procesos, es remarcable el **papel desempeñado por Naciones Unidas apoyando los diferentes procesos de negociación en 10 casos**. En algunos casos la ONU aparece involucrada como tercera parte a través de enviados especiales –como por ejemplo en los casos del conflicto en Burundi, entre Marruecos y el Sáhara Occidental o en Libia–, en el marco de plataformas o grupos de actores que pretenden actuar como facilitadores del diálogo –como en el caso de RCA, donde forma parte del Grupo de Apoyo Internacional y refuerza el diálogo político que lleva a cabo el Gobierno, y en partenariat con la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación–; o a través de sus misiones y representantes especiales del secretario general de la ONU en terreno –como en RCA, RDC, Malí y Sudán (Darfur).

También cabe destacar el rol de tercera parte que juega la UA en África en el marco de la Arquitectura de Paz y Seguridad en África (APSA)², en solitario o en colaboración con otras organizaciones regionales e internacionales, como la ONU. De los 17 casos de negociaciones y procesos de paz identificados en el continente africano en los que participan terceras partes, en 11 de ellos la UA estuvo presente en solitario (en cuatro casos) o colaborando con la ONU (en siete casos) o junto con organizaciones regionales involucradas en la facilitación de los contactos entre los actores en conflicto, entre ellas la Comunidad de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), en tres casos (Gambia, Malí y Togo); la Comunidad de Estados de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés) en el caso de Burundi; la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC, por sus siglas en francés), en el caso de RCA; y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), en tres casos (Somalia, Sudán del Sur y las negociaciones entre Sudán y Sudán del Sur); y por último, la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), en RDC. Cabe destacar que la UE también desempeñó funciones como tercera parte en el continente africano, entre ellos los casos de Libia, Malí (norte), Mozambique, RCA, RDC y Sudán-Sudán del Sur. Por último, cabe destacar los buenos oficios desempeñados por organizaciones religiosas en cinco contextos: la Organización para la

LA UA desempeñó un papel como tercera parte en más de la mitad de los procesos de paz africanos analizados en 2017

La liberación o intercambio de prisioneros para promover la confianza entre las partes estuvo presente en contextos como Etiopía (Ogadén), Malí (norte), Mozambique, Nigeria (Boko Haram), República del Congo y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)

Conferencia Islámica y la Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano) en RCA; la Iglesia Católica nacional y la Comunidad de Sant'Egidio en Mozambique; la Comunidad de Sant'Egidio en la región senegalesa de Casamance; la Conferencia Episcopal Congoleña (CENCO) en RDC; y el Alto Consejo Islámico en Malí.

En la mayoría de los casos de negociaciones y procesos de paz analizados en 2017 en el continente africano terceros **Estados también participaron como mediadores o facilitadores de los contactos y el diálogo entre las partes en disputa, a menudo Estados que son potencias regionales o con una proyección continental en la promoción de la construcción de la paz**. Entre estos países, cabe destacar por ejemplo el papel de Argelia en escenarios como el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental, en Libia, en Malí (norte) o en Sudán del Sur; el de Ghana en la crisis entre el Gobierno y la oposición política en Togo; el de Kenya, que ha promovido históricamente los contactos entre el grupo armado ONLF y el Gobierno etíope; el de Uganda, que ejerce un liderazgo regional en la facilitación de buenos oficios en los procesos de Burundi, RDC y entre Sudán y el SPLM-N en Kordofán Sur y Nilo Azul; el de Sudáfrica, en los procesos de Mozambique y en Sudán del Sur; el de Tanzania, en los conflictos de sus vecinos Burundi y Mozambique. En cinco de los 17 casos las antiguas metrópolis coloniales también desempeñaron o han desempeñado tareas de buenos oficios, como son Francia en Malí (norte); Italia en Libia; España y Francia en el contencioso entre Marruecos y Sáhara Occidental; y Reino Unido en Sudán y en Sudán del Sur.

En cuanto al análisis de los temas de la agenda de negociación, cabe destacar algunas cuestiones recurrentes en los distintos procesos. Por ejemplo, cuestiones relativas al **desarme de grupos armados, a la entrega de arsenales específicos y/o a la reintegración de combatientes**, un tema que a lo largo de 2017 estuvo presente en contextos como Mozambique, Malí (norte), RCA, Rep. del Congo y Sudán del Sur. Otro tema presente en los procesos de diálogo o en las demandas de algunos de los actores involucrados en procesos de negociación tiene que ver con **demandas para la liberación de prisioneros, o con medidas de liberación o intercambio de prisioneros como pasos para promover la confianza entre las partes y contribuir positivamente al proceso en marcha**. Este asunto estuvo en la agenda en diversos contextos durante 2017, entre ellos Etiopía (Ogadén), Malí (norte), Mozambique, Nigeria (Boko Haram), República del Congo y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul).

2. La APSA fue probada en el 2002 e incluye la Comisión de la UA, el Panel de Sabios, un sistema de alerta temprana a nivel continental, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA (el órgano de toma de decisiones) y el brazo militar que debía desarrollar, la African Standby Force (ASF).

El **estatus político y administrativo de determinados territorios** estuvo presente en diversos procesos de negociación en el continente africano, como por ejemplo en Etiopía (Ogadén), Malí (norte), el contencioso entre Marruecos y el Sáhara Occidental, Nigeria (Delta del Níger), Senegal (Casamance), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul). También estuvieron presentes cuestiones relativas a **demarcaciones fronterizas**, en casos como el de Sudán-Sudán del Sur, entre otros. Otros elementos de la agenda durante 2017 incluyeron cuestiones vinculadas a inclusividad, reformas políticas y económicas, cronogramas electorales, formación de gobiernos de transición o unidad nacional o mecanismos de reparación a víctimas del conflicto.

Las cuestiones relativas a la **declaración de treguas y altos el fuego, al respeto a compromisos de cese el fuego y a las negociaciones para el establecimiento de cese de hostilidades de largo plazo** también

constituyeron un tema clave y recurrente que estuvo presente en diversos contextos africanos a lo largo de 2017. En algunos casos se dieron pasos positivos, como **Malí (norte)**, donde las coaliciones de grupos insurgentes CMA y Plataforma alcanzaron un acuerdo el 20 de septiembre que incluía un cese de hostilidades, y que al finalizar el año se mantenía vigente. En **Mozambique**, la puesta en marcha por parte del movimiento político-militar opositor RENAMO de una tregua unilateral acabó confluyendo en una tregua permanente que contribuyó al fortalecimiento del proceso de paz. También cabe destacar la firma del acuerdo de alto el fuego en la **República del Congo** entre el Gobierno y los representantes del reverendo Ntoumi el 23 de diciembre, que fue respetado por las partes. Por el contrario, en **RCA**, la firma del acuerdo del cese de hostilidades en Roma el 19 de junio entre el Gobierno y 13 de los 14 grupos armados del país fue violado sistemáticamente, lo que puso de manifiesto la desconfianza entre las partes, aunque también se alcanzaron algunos ceses de hostilidades parciales entre grupos. En el contencioso entre **Marruecos y el Sáhara Occidental**, a finales de 2016 se produjo un brote de tensión debido a una iniciativa marroquí en una zona considerada de acceso restringido a las partes. Esta acción fue interpretada por el Frente POLISARIO como una violación del alto el fuego de 1991 lo que, en palabras del Consejo de Seguridad de la ONU, alentó dudas sobre el mantenimiento del cese al fuego y desencadenó el despliegue temporal de tropas por ambas partes. En las **regiones sudanesas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul**, el Gobierno de Sudán prorrogó en diferentes

momentos del año el alto el fuego unilateral establecido en enero hasta el 31 de diciembre, lo que contribuyó a que en el caso de Darfur, el JEM y el SLM-MM realizaran una declaración conjunta de alto el fuego en mayo, aunque tanto en Darfur como en Kordofán Sur y Nilo Azul el Gobierno y los actores armados violaron sus propios compromisos de alto el fuego. En último lugar, cabe destacar la situación de **Sudán del Sur**, país en el que la violación sistemática del alto el fuego alcanzado en 2015 llevó al colapso total del Acuerdo de 2015 entre el Gobierno y el SPLA-IO en septiembre de 2016, y las diferentes iniciativas de ceses de hostilidades unilaterales decretadas por ambas partes no fueron respetadas ni por ellas mismas. A pesar de que los esfuerzos de la IGAD por revitalizar el proceso consiguieron arrancar un nuevo alto el fuego el 21 de diciembre de 2017, al poco de su entrada en vigor el 24 de diciembre las partes ya lo habían violado sistemáticamente.

El estatus político y administrativo de determinados territorios estuvo presente en diversos procesos de negociación en África, como por ejemplo en Etiopía (Ogadén), Malí (norte), Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria (Delta del Níger), Senegal (Casamance), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)

En lo que respecta a la **evolución de las negociaciones y procesos de paz en 2017**, el análisis de los diferentes casos revela una diversidad de dinámicas. En clave positiva, al finalizar el año el **buen desarrollo de las negociaciones, la reactivación de procesos y la consecución de acuerdos** en algunos contextos permitía albergar ciertas expectativas sobre la evolución general de los respectivos procesos de paz. Es el caso de **Gambia**, donde la crisis derivada por la negativa del expresidente Yahya Jammeh a aceptar la derrota en las elecciones presidenciales del 1 de diciembre de 2016, fue reconducida gracias a las gestiones diplomáticas regionales, principalmente de la organización ECOWAS, que forzaron el retorno del presidente Adama Barrow, ganador de las elecciones, quien había huido a Senegal por motivos de seguridad, y la renuncia del candidato derrotado. En **Etiopía (Ogadén)**, la reactivación del proceso a finales de 2017 con la reunión preparatoria en EAU tuvo continuidad a principios de 2018 con la reunión en Suecia y posteriormente en febrero de 2018 se celebró una segunda ronda de negociaciones bajo la coordinación de oficiales de Kenya, y la liberación de presos llevada a cabo por el Gobierno etíope se interpretó como una medida para reforzar el proceso. En **Mozambique**, la tregua unilateral de RENAMO de principios de 2017 fue prorrogada creando un clima favorable para que se produjera el primer encuentro directo entre el presidente Nysui y el líder rebelde, Dhlakama, en agosto, que contribuyó a fortalecer el proceso y los cambios constitucionales necesarios. En la **Rep. del Congo**, la liberación de personas del entorno del movimiento político del

reverendo Ntoumi, el líder rebelde, fue interpretado como una medida de confianza de cara a facilitar los contactos que condujeron al acuerdo de finales de diciembre. Finalmente, en el contencioso entre **Sudán y Sudán del Sur**, a pesar de la fragilidad de las relaciones entre ambos países, de las amenazas mutuas y la volatilidad de la situación regional, a finales de año se avanzó hacia la normalización de sus relaciones y la creación de una zona de seguridad entre ambos países.

En otros casos, aunque **el diálogo entre las partes se mantuvo abierto y se celebraron diversas rondas de negociación durante el año e incluso se alcanzaron acuerdos, no se registraron avances significativos, ni en relación a la consecución de un acuerdo definitivo, ni en la fase de implementación de acuerdos** suscritos recientemente. Fue el caso, por ejemplo, de **Nigeria (Delta del Níger)**, donde los nulos avances en el diálogo que tiene lugar entre las diferentes coaliciones de actores de la sociedad civil como PANDEF o la NIDCA con el Gobierno nigeriano para implementar los acuerdos de paz alcanzados hasta la fecha, provocó que los actores armados del Delta del Níger amenazarán con el reinicio de la violencia. En **RCA**, a pesar de la firma del acuerdo de cese de hostilidades del 19 de junio en Roma, la desconfianza entre las partes de cara a proceder al desarme de los grupos provocó la reactivación de los enfrentamientos en paralelo a la continuación de las conversaciones con los grupos armados. Cabe destacar también el caso de **Malí (norte)**, como consecuencia de tensiones y divisiones entre las partes firmantes del acuerdo de Argelia en 2015 y la persistencia de las hostilidades, aunque en septiembre las dos coaliciones armadas opositoras –el CMA y la Plataforma– alcanzaron un acuerdo para hacer avanzar la implementación del Acuerdo de Argelia. En tercer lugar, el caso de **Sudán del Sur**, donde el colapso del acuerdo en septiembre de 2016 alcanzado en 2015 entre los sectores leales al presidente Salva Kiir y al ex vicepresidente Riek Machar por la persistencia de la violencia fue seguido durante la segunda parte de 2017 de diversas iniciativas y contactos promovidos por la IGAD, para configurar el conocido como Foro de Alto Nivel para la Revitalización del Acuerdo de 2015, que en diciembre consiguió reunir a las partes en Addis Abeba y que condujo a la firma del Acuerdo de Cesación de Hostilidades entre los 14 actores político-militares del país. Por último, en **Libia**, persistieron las dificultades para implementar el acuerdo de Skhirat suscrito a finales de 2015, hasta el punto de que una de las partes del conflicto, el general Khalifa Hifter, declaró el vencimiento del pacto y la ilegitimidad de las entidades políticas derivadas de él, pese a los múltiples esfuerzos para reimpulsar el proceso, en un contexto marcado por la fragmentación institucional y una persistente violencia.

Las tensiones entre el Gobierno mozambiqueño y RENAMO se redujeron ostensiblemente durante el año, debido a la evolución positiva de las negociaciones de paz

Otra cuestión destacable en diversos contextos de negociación es la existencia de los **spoilers o sabotadores**, actores que no participan en el proceso de paz y que con sus acciones amenazan con dificultar los esfuerzos por reconducir el conflicto por la vía dialogada, así como por la **fragmentación o divisiones internas de actores involucrados en el diálogo** que ponen en entredicho la credibilidad de los actores armados en

las iniciativas de negociación. En el caso de **Malí (norte)**, actores armados de tipo yihadista marginados de las negociaciones de paz de 2015 mantuvieron sus acciones armadas en el país. En la **región del Lago Chad (Boko Haram)**, las divisiones de Boko Haram se iniciaron cuando la organización ISIS nombró a Abu Musab al-Barnawi como líder del grupo en agosto de 2016, mientras que la otra facción siguió bajo el liderazgo de Abubakar Shekau. La facción de Shekau rechazó los intentos de negociación mientras que la facción al-Barnawi aparentemente estaba

más abierta a llevar a cabo contactos con el Gobierno nigeriano, según diversas fuentes. En el caso de **RCA**, la desconfianza entre las partes y la proliferación de actores provocó que algunos grupos armados hayan boicoteado la implementación de los diferentes acuerdos de paz y el inicio de un proceso de desarme. En el caso de **RDC**, la muerte del histórico líder Étienne Tshisekedi del partido opositor UDPS, que lideraba y unificaba una oposición política y social fragmentada, provocó una lucha por el liderazgo y divisiones en la oposición de cara a liderar la nueva etapa, que fueron aprovechadas por la mayoría presidencial para retrasar la implementación del acuerdo de diciembre de 2016. En el caso de **Sudán (Darfur)**, la fragmentación de la insurgencia y la proliferación de actores y agendas no contribuyó a reanudar las conversaciones encaminadas a alcanzar un cese de hostilidades. El Gobierno promovió la firma de acuerdos con actores menores que se sumaron al proceso de diálogo nacional, pero las precondiciones y ultimátums, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, obstaculizaron los avances del proceso con los principales actores armados –JEM, SLM-MM y SLM-AW–. Finalmente, en el caso de **Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)**, las divisiones dentro del SPLM-N afectaron al proceso de paz durante el año, ya que su vicepresidente Abdel-Aziz al-Hilu dimitió por desacuerdos con su máximo dirigente, Malik Agar, y con la posición negociadora del grupo, contraria a plantear la cuestión de la autodeterminación de las Montañas Nuba, como defendía al-Hilu. El órgano político del SPLM-N decidió relegar en junio a Agar y nombrar a al-Hilu como nuevo líder y comandante general, así como retirar también al secretario general y principal negociador Yasir Arman. Estas tensiones provocaron el retraso de las negociaciones y que el Gobierno sudanés afirmara que no negociarían con la facción de Agar, por su falta de capacidad de implementación de posibles acuerdos.

2.2 Análisis de casos

África Austral

Mozambique	
Actores negociadores	Gobierno, grupo armado RENAMO
Terceras partes	Equipo mediador nacional, Botswana, Tanzania, Sudáfrica, Reino Unido, UE, Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano), Iglesia Católica
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz de Roma (1992)
Síntesis: El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), apoyado por las minorías blancas gobernantes en la antigua Rhodesia (hoy Zimbabwe) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra que causó un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad. En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas de un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de cambios, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992, hecho que finalmente ocurrió, desatando la vuelta a los enfrentamientos armados en abril de 2013 y la posterior apertura de un nuevo proceso de negociación de paz acordado en agosto de 2014.	

Tras tres años de negociaciones, durante el 2017 se dieron diversos pasos positivos en el proceso de paz de Mozambique para que las partes alcancen un acuerdo que dé respuesta a las demandas planteadas en 2013 por parte de RENAMO. En primer lugar, a finales de 2016 el presidente Filipe Nyusi y el líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, mantuvieron contactos telefónicos que sirvieron para acercar posturas, lo que llevó a que RENAMO declarase una tregua unilateral hasta principios del año 2017 para que la población mozambiqueña pudiera recibir el año nuevo en un clima de paz. Dhlakama prorrogó durante todo el año 2017 esta tregua, lo que permitió el avance de las negociaciones de paz. En segundo lugar, en julio el Gobierno retiró las tropas de ocho posiciones cercanas a las montañas Gorongosa, el feudo de RENAMO, tal y como RENAMO había exigido en junio para proseguir con las negociaciones, lo que contribuyó a generar un clima de mayor confianza entre las partes. En tercer

lugar, durante el año se llevaron cabo contactos presenciales directos entre las partes, cuestión que no se producía desde 2015. En agosto de 2017 se celebró la primera reunión directa desde 2015 entre Nyusi y Dhlakama. La reunión tuvo lugar en el feudo histórico de RENAMO situado en el distrito montañoso de Gorongosa. Tras la reunión, RENAMO señaló que el proceso de descentralización debía presentarse en el Parlamento en diciembre, antes de que se celebraran las elecciones locales de 2018. Además, FRELIMO y RENAMO estuvieron discutiendo sobre las cuestiones que forman parte del núcleo del problema, la reivindicación para incrementar la descentralización del poder en el país, que concierne, entre otras cuestiones, al procedimiento para el nombramiento de los gobernadores provinciales.

El presidente Filipe Nyusi anunció a principios de febrero de 2018 que pondría en marcha los cambios constitucionales que permitieran a los partidos políticos que ganaran las elecciones parlamentarias provinciales seleccionar al gobernador regional, para su posterior aprobación por parte del presidente del país. Además, Nyusi y Dhlakama se reunieron a mediados de febrero de 2018 en Namadjiwa, para discutir en torno al desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de RENAMO y su incorporación en los cuerpos de seguridad del Estado. Cabe destacar también el apoyo internacional que continuó recibiendo el proceso, tras la petición que realizó Dhlakama en 2016 que fue aprobada por el presidente Nyusi en lo concerniente a la mediación de la comunidad internacional. Nyusi accedió a la petición y se incorporó a la mediación a la Iglesia y a la Comunidad de Sant'Egidio, la UE y el presidente surafricano, Jacob Zuma. Así, la UE nombró a Mario Raffaelli como coordinador del equipo internacional de mediación y representante de la UE, junto al padre Angelo Romano, de la Comunidad de Sant'Egidio. Una de las cuestiones que podría dificultar la implementación del acuerdo de paz es el papel que pueden acabar jugando los sectores más recalcitrantes de FRELIMO en la aprobación de los cambios constitucionales, ya que el Plan de Descentralización de Nyusi implica que RENAMO podría disponer de un mayor número de gobernadores provinciales y de administradores de distrito, lo que implicaría una pérdida directa de poder por parte de FRELIMO.

África Occidental

Malí (norte)	
Actores negociadores	Gobierno, Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA–
Terceras partes	Argelia, Francia, ECOWAS, UA, ONU, UE, Mauritania, Níger
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Paz y Reconciliación (2015)

Síntesis:

El conflicto armado que afecta a Malí desde principios de 2012 derivó en una crisis institucional –materializada en un golpe militar– y en un progresivo control de la zona norte del país por parte de grupos tuaregs y yihadistas. Desde el inicio del conflicto, diversos actores internacionales –entre ellos ECOWAS, UA y ONU– han promovido iniciativas conducentes al restablecimiento del orden institucional y a la recuperación de la integridad territorial de Malí. En paralelo a las aproximaciones militaristas para enfrentar la crisis, se iniciaron contactos exploratorios con algunos grupos armados (MNLA y Ansar Dine) para buscar una salida negociada. Pese al anuncio de un compromiso con el cese de hostilidades de estos grupos insurgentes, a principios de 2013 una ofensiva de Ansar Dine precipitó una intervención militar internacional liderada por Francia. En mayo de 2014 se volvió a poner en marcha un nuevo proceso negociador, liderado por Argelia, en el que el Gobierno de Malí negoció a dos bandas con las dos coaliciones creadas por los grupos armados: la Coordinadora de Movimientos de Azawad (grupos afines a una fórmula federalista/secesionista) y la Plataforma (grupos afines al gobierno). En julio de 2015 se logró finalmente la firma de un acuerdo de paz en Argel entre el Gobierno, la CMA y la Plataforma, quedando los grupos de corte yihadista fuera de las mesas de negociación, lo que ha mantenido las hostilidades por parte de estos grupos en un nuevo contexto de implementación de las cláusulas presentes en el acuerdo de paz.

Siguiendo con la tendencia observada en el año anterior, y con un trasfondo de persistente violencia entre múltiples actores armados, durante 2017 continuaron registrándose dificultades para la implementación del acuerdo de paz suscrito en 2015. **Los problemas para la puesta en marcha del acuerdo estuvieron relacionados, a nivel general, con el impacto de acciones violentas por parte de actores excluidos del pacto de 2015, con la escalada de hostilidades entre grupos suscriptores del acuerdo y con la no adopción de algunas de las medidas previstas en el pacto.** Durante el primer semestre el proceso de paz se vio afectado por un ataque del grupo armado al-Mourabitoun –no participante en el acuerdo– contra un campo conjunto de fuerzas militares y grupos armados que dejó más de 60 víctimas mortales en enero. En este campo más de 600 integrantes de las Fuerzas Armadas malienses, de la CMA (grupos afines a una fórmula federalista/secesionista) y de la Plataforma (grupos pro-unidad, afines al Gobierno) preparaban patrullas conjuntas previstas en el acuerdo de paz. Pese a que se temió un posible colapso del acuerdo tras este atentado, las partes confirmaron su adhesión al pacto. Tras este episodio, en febrero se celebró una reunión de alto nivel del Comité de Supervisión del Acuerdo convocada por Argelia –principal país mediador–, en la que participaron representantes del Gobierno maliense, de la Plataforma y del CMA –que desde diciembre de 2016 había boicoteado las reuniones del comité argumentando falta de inclusividad en la toma de decisiones sobre la implementación del acuerdo– y de otros actores involucrados en la mediación internacional, incluyendo los Gobiernos de Mauritania, Níger, Francia, la UA y la misión de la ONU en Malí, MINUSMA. En este

La implementación del acuerdo de 2015 en Malí se vio afectada por la escalada de hostilidades entre grupos armados firmantes del pacto a mediados de año

encuentro se avanzó en la definición de un calendario para la puesta en marcha de temas clave, como la designación de autoridades interinas, el lanzamiento de patrullas conjuntas, la realización de consultas para la organización de la Conferencia de Concordia Nacional (Conférence d'Entente Nationale) y la designación de un observador independiente.

Los preparativos para la Conferencia de Concordia Nacional provocaron nuevos roces entre distintos actores. Así, por ejemplo, CMA y Plataforma plantearon la necesidad de avanzar en el establecimiento de las autoridades interinas y en el proceso de acantonamiento y DDR antes de celebrar la conferencia, mientras que grupos de la oposición cuestionaron que la agenda se focalizara exclusivamente en asuntos relevantes para el norte del país y sectores de la sociedad civil demandaron una mayor presencia de mujeres y jóvenes. Finalmente la conferencia se celebró en Bamako entre el 27 de marzo y el 2 de abril y contó con más de mil participantes, un 32% mujeres. Partidos de la oposición se marginaron de la iniciativa y el CMA accedió a sumarse tras un acuerdo con el Gobierno. La conferencia tuvo como resultado una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la necesidad de abordar asuntos como la falta de inclusividad en el proceso político, cuestiones de gobernanza y seguridad y temas vinculados a la diversidad cultural en Malí. El presidente de Malí desestimó una de las recomendaciones surgidas del encuentro, relativa al establecimiento de negociaciones con grupos armados excluidos del acuerdo de paz, entre ellos organizaciones de inspiración yihadista como Ansar Dine, y el Frente de Liberación Nacional Macina. Durante una visita a Bamako, los ministros de Exteriores de Francia y Alemania también mostraron su oposición a negociar con “terroristas”. Las recomendaciones de la conferencia estaban encaminadas a enriquecer la Carta para la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional, prevista en el acuerdo de 2015 (documento de unas 60 páginas presentada como fruto de la Conferencia de Concordia Nacional). En mayo se estableció una comisión encargada de la redacción de esta carta, integrada por 53 personas, de las cuales tan solo seis eran mujeres. Esta reducida presencia en la comisión contrastó con una participación más destacada de mujeres en la conferencia previa. El texto de la carta fue entregado al Presidente Keita el 20 de junio, pero contó con el rechazo de algunos sectores, como el CMA, que cuestionó que no se reconociera a Azawad como una entidad política.

Paralelamente, en torno a mediados de año –coincidiendo con el fin del período interino previsto en el acuerdo de 2015–, las partes alcanzaron un consenso sobre una hoja de ruta revisada para la implementación del pacto y para el establecimiento de un mecanismo de coordinación en Kidal (norte). Sin embargo, estos desarrollos no llegaron a concretarse y se vieron afectados por una intensificación de la violencia entre

distintos actores armados suscriptores del pacto, principalmente entre la organización GATIA –que integra la Plataforma pro-unidad nacional– y sectores de la alianza separatista CMA en las regiones de Kidal y Ménaka. El incremento de las hostilidades se produjo en un contexto marcado por retrasos a la hora de nombrar las autoridades interinas, falta de progresos a la hora de desplegar funcionarios en el norte y centro del país debido a la situación de inseguridad y problemas para poner en marcha el proceso de DDR, según lo dispuesto en el acuerdo de paz. La violencia no se redujo hasta la adopción de acuerdos de cese el fuego, en agosto y septiembre, tras la intervención de una misión de buenos oficios impulsada por el Gobierno maliense y apoyada por actores internacionales involucrados en el proceso de paz. La misión de buenos oficios fue creada a finales de junio y estuvo liderada por el líder del Alto Consejo Islámico, Mahmoud Dicko, quien mantuvo reuniones con sectores cercanos tanto al CMA como a la Plataforma. Tras semanas de enfrentamientos, las partes accedieron a finales de agosto a suscribir un acuerdo de cese de hostilidades, inicialmente por 15 días, que fue renovado en septiembre por un mes más. En este contexto, **a mediados de septiembre se celebraron contactos entre el CMA y la Plataforma, que culminaron el 20 de septiembre en la firma de un documento de compromisos. El acuerdo incluyó tres cuestiones centrales: un cese definitivo de las hostilidades, la reanudación de las conversaciones para definir un calendario para la implementación total del acuerdo de 2015, y medidas de confianza para el acantonamiento y proceso de DDR.** Posteriormente tuvieron lugar conversaciones de reconciliación en Anéfis, en la región de Kidal, entre el 5 y 11 de octubre entre las partes signatarias del acuerdo en las que se debatieron, entre otros temas, la liberación de personas detenidas, la identificación de personas desaparecidas y la investigación de los presuntos crímenes cometidos a partir de 2017 por las organizaciones suscriptoras del pacto, una tarea que quedó en manos de jueces tradicionales. Estas conversaciones contaron con la facilitación del representante especial de la ONU en el país, en coordinación con el Gobierno maliense y con Argelia, y derivaron en el establecimiento de comités de reconciliación para diseminar el contenido del acuerdo alcanzado en Anéfis.

Al finalizar 2017 se mantenía vigente la tregua. No obstante, diversas dinámicas de tensión persistían. Así, por ejemplo, una coalición de facciones de los grupos armados excluidos del acuerdo (CME) exigió en diciembre su participación en los mecanismos de supervisión y amenazó con bloquear su puesta en marcha si no se accedía a su demanda. Algunas de las partes firmantes del acuerdo también denunciaron que el Gobierno maliense había adoptado algunas medidas unilaterales, como la promulgación en octubre de una ley sobre comunidades territoriales, que define el marco para el proceso de descentralización en el país. En la

Las mujeres continuaron siendo mayoritariamente marginadas del proceso de paz en Malí

recta final del año, en tanto, la atención política estuvo centrada en la celebración de elecciones regionales, que debían haberse llevado a cabo en diciembre según el calendario previsto, pero que fueron pospuestas por el Consejo de Ministros de Malí hasta abril de 2018. Ello, después de que grupos armados firmantes del acuerdo amenazaran con un boicot a las elecciones si primero no se avanzaba en la implementación de asuntos clave del pacto de 2015 y no se revisaba la ley de descentralización. Cabe destacar que otro de los temas que afectó el clima político interno durante 2017 fue el proceso de reforma constitucional, en especial tras la presentación de propuestas de modificación que pretendían reforzar la figura del presidente (entre ellas, competencias para designar a un cuarto de los integrantes del Senado y poder para destituir al primer ministro). La reforma constitucional marcó intensamente la agenda del país desde mediados de año. La plataforma *“An tè a banna! Touche pas à ma Constitution”*, integrada por partidos políticos de oposición y actores de la sociedad civil, entre otros, protagonizó diversas manifestaciones contra el borrador de texto constitucional presentado por el Gobierno del presidente Keita. En este escenario, el mandatario decidió en agosto suspender el referéndum constitucional y se comprometió a llevar a cabo consultas más inclusivas.

En otros aspectos relativos a la implementación del acuerdo de 2015, cabe destacar que el informe del secretario general de la ONU de finales de diciembre de 2017 destacó que el contexto de inseguridad no solo se estaba cobrando la vida de civiles y efectivos armados –la MINUSMA fue la misión con mayor número de bajas en 2017– sino que también estaba impidiendo el despliegue de funcionarios –incluyendo cargos judiciales– en el norte y centro del país. Adicionalmente, el proceso de DDR continuaba pendiente de la provisión de listas de participantes por parte de los grupos armados –que no habían entregado aún las listas de sus respectivos combatientes– y del acantonamiento de fuerzas, en medio de desacuerdos entre el Gobierno y las organizaciones armadas respecto a las cuotas de integración de excombatientes en las Fuerzas Armadas. **Algunos progresos destacados en la implementación del acuerdo incluyeron el establecimiento de la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación; el despliegue de las autoridades interinas en todas las regiones del norte del país y la puesta en marcha de patrullas conjuntas en Gao.** Adicionalmente, cabe mencionar que el Comité de Supervisión del Acuerdo mantuvo sus reuniones periódicas a lo largo del año. Durante el último trimestre de 2017, el comité adoptó algunas decisiones relevantes. Por un lado, resolvió que el Centro Carter (EEUU) asumiera el rol de observador independiente. Por otra parte, se acordó que representantes de Argelia y de MINUSMA participaran en todas las discusiones entre los actores malienses con el fin de actuar como observadores y, en caso de necesidad, oficiar

como mediadores o proporcionar asistencia técnica. Finalmente, cabe apuntar que en junio de 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2364 que renueva el mandato de MINUSMA hasta junio de 2018. En septiembre, el Consejo también aprobó de manera unánime la resolución 2374 que impone sanciones –prohibiciones de viaje y congelamiento de fondos– a individuos y entidades que amenacen la paz, seguridad y estabilidad en Malí y crea un nuevo comité y panel de expertos para examinar las violaciones

Por otra parte, cabe destacar que las mujeres malienses continuaron siendo marginadas y que su inclusión en el proceso no fue priorizada a pesar de la movilización de diversas organizaciones locales de mujeres, de las acciones promovidas por ONU Mujeres y MINUSMA, del marco internacional definido por la resolución 1325 que pretende favorecer su inclusión y de la existencia de un Plan de Acción Nacional para la Implementación de la UNSCR 1325, que cubre el período 2015-2017 y tiene entre sus objetivos favorecer la participación de mujeres en la implementación del acuerdo de paz. En este sentido, y como se mencionó previamente, cabe destacar la limitada presencia de mujeres en el comité de elaboración de la Carta para la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional –seis mujeres entre los 53 integrantes de la comisión (11,3%)– pese a que las mujeres representaron un 32% en la Conferencia de Concordia Nacional. Adicionalmente, algunos análisis constataron la subrepresentación de mujeres en los mecanismos de implementación y supervisión del acuerdo de paz –entre ellos el Comité de Supervisión del Acuerdo, la Comisión de DDR, el Consejo Nacional para la Reforma al Sector de Seguridad y la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación– ya que, en promedio, la presencia de mujeres en estos espacios oscilaría en torno al 3%.³ Teniendo en cuenta los reclamos de activistas malienses sobre la necesidad de que las mujeres tengan un mayor papel en los mecanismos de implementación y supervisión, analistas sugirieron una presencia más relevante en el Comité de Supervisión del Acuerdo y la creación de mecanismos paralelos para evaluar la puesta en marcha del pacto teniendo en cuenta indicadores de género.⁴

El Gobierno nigeriano mantuvo contactos bilaterales con Boko Haram para conseguir la liberación de rehenes

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, protagonizaron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros en los diferentes países de la región por parte de la fuerza militar conjunta regional (MNJTF) formada por Nigeria, Níger, Camerún y Chad desde 2016, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en la región con un elevado impacto en la población civil. En el transcurso del conflicto, el Gobierno nigeriano ha llevado a cabo diversos contactos con facciones del grupo armado de cara a poner fin al conflicto y conseguir acuerdos humanitarios.

En medio del conflicto que tiene lugar en la región del Lago Chad entre el grupo armado Boko Haram (BH) y los diferentes países de la región, **el Gobierno nigeriano ha mantenido contactos durante los últimos años on el grupo armado para poner fin al conflicto, contactos que no han sido públicos**, y la administración del presidente Muhammadu Buhari ha afirmado repetidamente su voluntad de poder entablar conversaciones de paz con el grupo armado. En este sentido, **el Gobierno reveló en 2016 que había llevado a cabo contactos con el grupo armado desde julio de 2015** para conseguir la liberación de las 270 menores secuestradas en la escuela de Chibok (estado de Borno, en el noreste) en abril de 2014, contactos que se iniciaron al poco de que el presidente Muhammadu Buhari ocupara la presidencia en mayo de 2015. Estos contactos fracasaron pero continuaron hasta que en mayo de 2017 BH liberó a 82 de las 270 menores secuestradas en Chibok a cambio de la liberación de cinco de sus comandantes encarcelados. Paralelamente, el 10 de febrero de 2018 el grupo liberó a 13 personas secuestradas durante 2017 en el noreste de Nigeria, según el Gobierno, entre las cuales 10 mujeres capturadas durante un ataque a un convoy policial y tres profesores de Maiduguri retenidos durante una misión de exploración de petróleo. Este acuerdo humanitario fue facilitado por la organización ICRC. Por su parte, ICRC publicó un comunicado afirmando que había participado en esta acción como intermediario neutral y no estaba implicada en negociaciones.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Actores negociadores	Gobierno de Nigeria, Boko Haram (facción Abubakar Shekau), Boko Haram (facción Abu Musab al-Barnawi)
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Acuerdo humanitario entre el Gobierno de Nigeria y el grupo armado Boko Haram, 6 de mayo de 2017

Cuernos de África

Etiopía (Ogadén)	
Actores negociadores	Gobierno, movimiento político militar ONLF

3. Jenny Lorentzen, *Women's Inclusion in the Peace Process in Mali*, PRIO Blogs, 13 de febrero de 2018.
 4. Ibid.

Terceras partes Kenya, EAU y Suecia

Acuerdos relevantes --

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de grupos armados de carácter etnopolítico que reclaman un mayor grado de autonomía o incluso la independencia del poder central. Entre ellos se encuentra el ONLF, fundado en 1984 y que opera en la región de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo la independencia de la región habitada por la comunidad somalí. El ONLF colaboró con la oposición a Mengistu para conseguir derrocarlo, hecho que tuvo lugar en 1991. En 1994 el Parlamento de la región de Ogadén, denominada el Estado Regional Somalí (Somali Regional State, SRS), aprobó una resolución por la que pretendía celebrar un referéndum de autodeterminación lo que le comportó su disolución por parte del Gobierno etíope. Desde entonces, el ONLF combate al régimen etíope planteando que la solución al conflicto pasa por la aceptación del principio a ejercer el derecho a la autodeterminación, tal y como establece la Constitución etíope, sin precondiciones ni restricciones. Durante estos años se han producido esporádicos contactos entre las partes sin éxito, en paralelo a la continuidad de los combates, que a partir de 2006 han ido en aumento. No ha sido hasta mediados de 2012 cuando se han producido los contactos más firmes hasta la fecha de cara a intentar resolver el conflicto. Desde entonces, se han ido produciendo contactos esporádicos más o menos confidenciales entre las partes con la mediación de Kenya.

A finales del año 2017 se produjo un encuentro no oficial preparatorio entre representantes del Gobierno etíope y de la insurgencia de Ogadén en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Dicha reunión pretendía promover la celebración de una segunda ronda de negociaciones a principios de 2018. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en 2012 y desde entonces se habían producido intentos de reabrir las negociaciones pero no ha sido hasta la fecha que los esfuerzos negociadores han fructificado. A mediados de enero de 2018 Kenya envió una delegación a Suecia liderada por el antiguo ministro de Defensa y parlamentario representando el condado de Garissa (Kenya), Mohamed Yusuf Haji, para reunirse con representantes del ONLF con el objetivo de facilitar la reanudación oficial de las conversaciones, según fuentes locales. El 22 de enero representantes del ONLF celebraron un encuentro con las comunidades somalíes ogadenis en EEUU para poder escuchar sus recomendaciones de cara a las conversaciones entre el Gobierno etíope y el ONLF.

Así, finalmente, **el 11 de febrero de 2018 tuvo lugar en Nairobi la segunda ronda de negociaciones.** El gobernador del condado de Garissa, el embajador Ali Bunow Korane, quien coordina las conversaciones de paz, afirmó que se habían llevado a cabo algunos progresos tras casi seis años de presiones al ONLF y al Gobierno etíope para que volvieran a la mesa de negociaciones y se había alcanzado una etapa crucial para el proceso. El portavoz del ONLF, Abdulkadir Sheikh Hassan Hirmoge (Adani) anunció que habían participado en las conversaciones de paz con el Gobierno

etíope en Nairobi y que tenían “importantes planes”, sin concretar detalles. Ni la delegación gubernamental, liderada por el coronel Gebre Egziabher Alemseged (coronel Gabre), antiguo jefe interino de la Oficina del Facilitador para la Reconociliación Nacional y de Paz de Somalia, ni Abdi Mohamoud Omar, presidente de la región de Somalí (Somali Regional State, SRS), hicieron declaraciones. Por la parte rebelde, la delegación de alto nivel del ONLF incluía las alas política y militar del grupo y estaba compuesta por su jefe negociador, Abdirahman Mahdi; por el comandante del brazo militar (ONLA), Sulub Abdi Ahmed; por el presidente del Comité del ONLF, Ahmed Yasin Dirane; y por el jefe de finanzas del grupo, Ibado Hirsi Mahad. Estas conversaciones tuvieron lugar en paralelo a la continuación de los enfrentamientos entre el ONLF y la Policía Liyu en las provincias de Degahbur y Nogob.

Días después de la reunión el Gobierno etíope liberó 1.500 presos de la prisión Jail Ogaden, cárcel situada en la región de Ogadén a unos 80 km al este de la ciudad de Harar, escenario de graves violaciones de los derechos humanos según el grupo armado y organizaciones de defensa de los derechos humanos. El grupo insurgente anunció que estos presos estaban vinculados al ONLF, aunque añadió que todavía había muchos otros presos en cárceles etíopes. No obstante, también reiteró a través de las redes sociales que no se había alcanzado ningún acuerdo con el Gobierno, a raíz de diferentes informaciones que habían circulado. Fuentes locales habían señalado que la liberación de estos 1.500 presos (entre los cuales había 100 supuestos presos políticos) formaba parte del acuerdo de paz alcanzado.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Actores negociadores	Gobierno, oposición política y social agrupada en el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED)
Terceras partes	Comunidad de Estados de África del Este (EAC por sus siglas en inglés), ONU
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Arusha para la paz y la reconciliación en Burundi (2000), Acuerdo global de alto el fuego (2006)

Síntesis:

La mediación iniciada en 1998 por el presidente tanzano Julius Nyerere y culminada por el sudafricano Nelson Mandela cristalizó en la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000, que sentó las bases para poner fin al conflicto en Burundi iniciado en 1993. Este acuerdo, aunque no redujo totalmente el clima de violencia hasta unos cuantos años más tarde (con la firma del pacto entre las FNL y el Gobierno, en 2006, y el inicio de su implementación a finales de 2008), supuso el inicio del proceso de transición política e institucional que acabó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso

electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, sentaron las bases de futuro para superar el conflicto y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ensombreció el proceso de reconciliación y provocó la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales también calificadas como fraudulentas en abril de 2015, la subsiguiente escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. Desde entonces, la EAC ha facilitado sin éxito un diálogo político entre el Gobierno y la coalición CNARED, que agrupa a la oposición política y social, parte de ella en el exilio por ser considerada como la responsable o cómplice del golpe de Estado de 2015.

Tres años después del inicio de la última crisis política en el país, desencadenada por la decisión del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), de apoyar la candidatura del presidente Pierre Nkurunziza para un tercer mandato presidencial que ganó en julio de 2015, la situación política permaneció totalmente estancada y el clima de violencia continuó deteriorándose. **Los esfuerzos regionales por resolver la crisis por medio de un diálogo político inclusivo bajo los auspicios de la Comunidad de Estados de África del Este (EAC) no consiguieron avances.** Durante el 2016 se celebró sin éxito un proceso de diálogo nacional entre diversos partidos y el CNDD-FDD bajo los auspicios de la Comisión Nacional para el Diálogo Interburundés (CNDI) establecida por el Gobierno, cuya legitimidad e inclusividad fue cuestionada por la propia ONU. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, nombrado mediador oficial por la EAC, señaló en 2016 que la CNARED⁵ era la principal coalición opositora del país, por lo que su presencia en el CNDI era determinante de cara a legitimar este proceso y su participación se consideró decisiva en cualquier intento de negociación política.

En el marco del proceso de diálogo liderado por la EAC se han celebrado cuatro rondas encabezadas por el presidente Museveni, como mediador, y el ex-presidente tanzano Benjamin Mkapa, como facilitador. La primera se celebró en Entebbe (Uganda) en diciembre de 2015 y las otras tres en Arusha (Tanzania) en mayo y julio de 2016, y la última entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017, aunque con retrasos y ausencias de las partes. En paralelo, se celebraron consultas por separado con el Gobierno y algunos miembros de la oposición política entre 2015 y 2017.

El facilitador de la EAC en las negociaciones de paz entre el Gobierno burundés y la oposición, el tanzano Mkapa, fue acusado de sesgo a favor del régimen

No obstante, no se produjo un diálogo directo entre los representantes del Gobierno y de la coalición política y social, CNARED. Esta cuarta ronda contó con la presencia de representantes del Gobierno burundés pero fue boicoteada por la coalición opositora CNARED y representantes de la sociedad civil en el exilio. El facilitador y ex presidente tanzano Benjamin Mkapa no invitó a la oposición representada por la CNARED. La CNARED había solicitado al facilitador que la invitara como un bloque unido, pero él lo rechazó y decidió seleccionar alguno de sus miembros que deberían participar en el diálogo sin su consentimiento, por lo que la coalición decidió boicotear la reunión, calificándola de poco inclusiva y de no ofrecer suficientes garantías de seguridad. El Gobierno manifestó su compromiso con el diálogo promovido por la EAC pero rechazó reiteradamente mantener contactos con los implicados en el golpe de Estado fallido de mayo de 2015 y con los dirigentes de la sociedad civil del movimiento “Halte au troisième mandat”, de oposición al tercer mandato, que componen la CNARED. El Gobierno, en cambio, pidió que el proceso de diálogo volviera a tener lugar en el interior del país y se fusionara con el proceso de la CNDI, decisión rechazada por la EAC. Benjamin Mkapa ha sido calificado de parcial por la oposición política y social

tras diferentes decisiones tomadas en el transcurso de la facilitación, y básicamente por haber anunciado en diciembre de 2016 la legitimidad del tercer mandato de Nkurunziza y haber remarcado que el diálogo se centraría en la preparación de unas elecciones libres y justas en 2020, lo que provocó el rechazo de la oposición política y de la sociedad civil que calificaron a la mediación tanzana de amateurismo, de colusión y sesgo a favor del régimen.

Tras esas declaraciones, la **CNARED exigió un relevo de la facilitación tanzana e incluso hizo un llamamiento a que la ONU sustituyera a Tanzania en el diálogo interburundés.** Ante las dificultades para llevar a cabo este diálogo, Mkapa también solicitó en 2016 a los países de la región que presionaran al Gobierno y a la oposición para forzar un compromiso con el diálogo sin condiciones previas. Sin embargo, los países vecinos también mantuvieron divergencias de opiniones en relación al contencioso, ya que Rwanda es claramente hostil al Gobierno burundés, en paralelo a la silenciosa complacencia de Tanzania y Uganda o la indiferencia de Kenya, lo que dificulta una posición común a nivel regional, según diversos analistas. A esto se unen las diferentes posiciones a nivel internacional. La EAC celebró el 20 de mayo una cumbre en la que pidió a la UE que retirara las sanciones contra Burundi lo que permitiría que la EAC firmara el Acuerdo de Asociación Económica con la UE, a lo que la UE anunció que mantendría las sanciones mientras persistiera la crisis. Por otra parte, China en mayo acordó proporcionar 30 millones de dólares de apoyo al presupuesto burundés.

5. La CNARED está formada por 22 partidos y movimientos políticos opositores y liderada por Jean Minani, quien ha sido presidente de la Asamblea Nacional en dos ocasiones y líder del partido FRODEBU.

Ante la difícil relación entre el enviado especial del secretario general de la ONU, Jamal Benomar (que a su vez es ostentaba el cargo de consejero especial del secretario general de la ONU sobre Prevención de Conflictos, al nivel de secretario general adjunto) y el Gobierno burundés, el 5 de mayo el secretario general de la ONU anunció el nombramiento del burkinabés Michel Kafando como nuevo enviado especial del secretario general de la ONU. Kafando tiene una amplia experiencia de más de 30 años en diplomacia internacional y fue presidente de su país entre 2014 y 2015. Su rol incluye liderar y coordinar los esfuerzos políticos para promover la paz en el país, y proporcionar asistencia a la organización regional EAC. La rapidez de Pierre Nkurunziza en aceptar el candidato sugirió, según diversos analistas, que no es percibido como una amenaza por parte del Gobierno. Las autoridades anunciaron el 29 de junio que esperaban que el nombramiento del nuevo enviado pudiera reactivar el proceso, pero le alertaron de posible parcialidad en su enfoque hacia los partidos políticos opositores. Kafando es el cuarto enviado de la ONU desde junio de 2015, cuando se inició la crisis. El presidente Pierre Nkurunziza a finales de octubre adoptó el borrador de la ley para reformar la Constitución vía un referéndum que se celebrará previsiblemente en mayo de 2018, para permitirle competir en las elecciones hasta 2034, y el 12 de diciembre lanzó oficialmente la campaña para la celebración de este referéndum. Las enmiendas previstas pretenden abolir el límite de dos mandatos y prolongar el mandato presidencial a siete años. En enero de 2018, 23 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “Teshwa Ute” (alto) contra el referéndum.

Por último, se hizo efectiva el 27 de octubre la retirada de Burundi de la Corte Penal Internacional (CPI) decidida un año antes. El Estado africano formalizó su salida por considerar al Tribunal parcial y centrado en los delitos perpetrados sólo por africanos. Es el primer Estado miembro que da la espalda al único organismo permanente que persigue el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. La decisión supone un duro golpe para la justicia internacional, pero no afecta a la competencia de la Corte sobre una investigación anterior sobre Burundi. Fechada en 2015, incluye la muerte de 430 personas en las protestas registradas tras el anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza, antiguo líder rebelde de la comunidad hutu (mayoritaria en el país) optaba a un tercer mandato. La marcha de Burundi fue notificada oficialmente en 2016 a Naciones Unidas. Poco después, por la misma supuesta falta de imparcialidad de la CPI, Sudáfrica y Gambia también anunciaron su retirada, aunque ambos países modificaron posteriormente su decisión. La fiscal jefe, Fatou Bensouda, siguió adelante con su trabajo en Burundi. Un expediente en el que figura asimismo el arresto de 3.400 personas y la huida de unas 230.000 más en busca de refugio en los países vecinos. Asesinatos,

La ONU sustituyó en Burundi a su enviado especial, Jamal Benomar, por el ex presidente burkinabés Michel Kafando, el cuarto enviado desde 2015

tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas completan la documentación. En este sentido, el 9 de noviembre la CPI anunció su decisión de abrir una investigación por la posible comisión de crímenes contra la humanidad cometidos en Burundi entre abril de 2015 y octubre de 2017. La CPI afirmó que tiene jurisdicción para juzgar a Burundi durante el periodo en que todavía era miembro de la CPI. El Gobierno de Burundi rechazó la decisión, que fue también condenada por los presidentes de Tanzania y Uganda.

RCA	
Actores negociadores	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka
Terceras partes	Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA con apoyo de CEEAC, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Humanitarian Dialogue
Acuerdos relevantes	Pacto republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción en la RCA (2015), Acuerdo de Cese de Hostilidades (junio de 2017)

Síntesis:
Desde su independencia en 1960, la situación en la República Centroafricana se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Tras las elecciones de 2005, en las que venció François Bozizé y que consolidaron el golpe de Estado perpetrado previamente por éste, surgen diferentes movimientos insurgentes en el norte del país, marginado históricamente y de confesión musulmana, que en diciembre de 2012 forzaron la celebración de negociaciones. En enero de 2013 en Libreville el Gobierno de François Bozizé y la coalición de grupos armados, llamada Séléka, acordaron un Gobierno de transición pero Séléka decidió romper el acuerdo y tomó el poder derrocando a Bozizé. No obstante, milicias de autodefensa (“antibalaka”), sectores del Ejército y partidarios de Bozizé se rebelaron contra el Gobierno de Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizada, y en diciembre de 2014 una nueva ofensiva puso fin al Gobierno de Séléka y se configuró un Gobierno de transición liderado por Catherine Samba-Panza. Los líderes regionales, encabezados por el congolés Denis Sassou-Nguesso, facilitaron iniciativas de diálogo en paralelo a la configuración de un proceso de diálogo nacional. El proceso de diálogo nacional culminó en mayo de 2015. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron implementados, como la celebración de las elecciones que pusieron fin a la fase de transición, pero el desarme e integración de los miembros de las guerrillas en los cuerpos de seguridad sigue pendiente, lo que ha comportado la persistencia de la inseguridad y la violencia. El Gobierno está intentado negociar con ellas con la mediación de la UA, en coordinación con la CEEAC y la ONU.

Aunque durante el 2017 se constataron diferentes avances para promover la autoridad del Estado y las iniciativas de diálogo en el país, el contexto político siguió caracterizándose por un recrudescimiento de

la violencia. Las críticas al Gobierno se hicieron más fuertes y varias figuras de la oposición cuestionaron abiertamente el liderazgo del presidente, Faustin-Archange Touadéra, y presentaron al Gobierno como incapaz de garantizar la estabilidad (70% del territorio controlado por los grupos), lo que contribuyó a una reforma del Ejecutivo en septiembre. Algunos agentes políticos y de la sociedad civil criticaron a la MINUSCA por no desarmar a la fuerza a los grupos armados y pidieron el rearme de las Fuerzas Armadas nacionales no reformadas. La creciente retórica divisiva utilizada por algunos agentes nacionales contribuyó a un aumento de las tensiones sectarias, especialmente en el sudeste del país, donde los musulmanes, en general, y los fulani, en particular, fueron blanco de ataques, según destacó la ONU. La organización señaló que la retórica incendiaria, la estigmatización étnica y la manipulación religiosa siguieron teniendo efectos negativos en la política nacional y los medios de comunicación, creando un entorno en el que el **riesgo de enfrentamientos interétnicos seguía siendo continuo y la desconfianza de cara a fortalecer las iniciativas de paz en marcha más difíciles.** Esta organización internacional estuvo promoviendo contactos con los diferentes actores armados, políticos y sociales. A finales de 2016 se puso en marcha **la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación**, con el objetivo de coordinar todos los esfuerzos de mediación en el país. Liderada por la UA, cuenta con el apoyo de los países de la región a través de la CEEAC (ECCAS, por sus siglas en inglés), la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad. Ante la persistencia de la violencia, en abril, EEUU impuso sanciones financieras a líderes ex Séleka (Abdoulaye Hissène) y antibalaka (Maxime Mokom). El Gobierno y representantes de los 14 grupos armados y miembros de la comunidad internacional se reunieron el 20 y 21 de abril en Bangui para acordar un programa piloto con la MINUSCA para llevar a cabo la reintegración de los ex combatientes, pero el Frente Patriótico para el Renacimiento de RCA (FPRC) impuso condiciones, entre las cuales destacaba la participación en el Gobierno, tal y como ya había exigido en ocasiones anteriores. El programa piloto arrancó finalmente el 30 de agosto, y pretendía reintegrar 560 combatientes (40 de cada uno de los 14 grupos armados) en la vida civil o militar, de los cuales 60 se integraron en las FFAA el 19 de septiembre, aunque con dificultades, ya que el FPRC afirmó que su participación estaba condicionada a la liberación de presos.

Durante el año se dieron diversas iniciativas para promover el proceso de paz en el país. Además de los intentos e iniciativas parlamentarias lideradas por el presidente del Parlamento, Abdou Karim Meckassoua, **cabe destacar la firma de un acuerdo de cese de hostilidades el 19 de junio en Roma entre el Gobierno y 13 de los 14 grupos armados activos en el país.** El alto

Los diferentes actores nacionales e internacionales acordaron unificar las iniciativas de mediación estableciendo una hoja de ruta en RCA

el fuego fue alcanzado tras una reunión de cinco días promovido por la Comunidad de Sant'Egidio. El acuerdo establece que se concedería representación política a los grupos armados y sus miembros serán integrados en las FFAA. Los grupos manifestaron su compromiso en garantizar la libertad de movimiento de personas y bienes y su voluntad de levantar todas las barreras y puestos de control ilegales como consecuencia inmediata de la aplicación del alto el fuego. En paralelo, se creó el Special Criminal Court (SCC), un tribunal híbrido compuesto por jueces nacionales e internacionales. Es la primera vez que el sistema judicial de la RCA enjuiciará crímenes según el derecho internacional. Los debates entre promoción de la paz y de la justicia formaron parte de las discusiones, ya que la amnistía para los grupos podría ser un elemento incentivador de cara al desarme, pero otros señalan que en lugar de acabar con los agravios, la amnistía podría promover la perpetuación de la cultura de la impunidad en el país, tal y como alertaban las conclusiones del Foro nacional de 2015, de ahí la creación del SCC. En este sentido, en enero de 2018 el tribunal condenó al general Andilo, líder anti-balaka, a cadena perpetua, la primera sentencia desde el inicio de la última fase del conflicto en 2013.

Sin embargo, se desencadenaron nuevos enfrentamientos al día siguiente de la firma del cese de hostilidades el 19 de junio que causaron la muerte de 40 personas en la localidad de Bria, en el centro-este del país, sembrando de dudas el proceso. El 21 de junio, **en Bruselas, el Gobierno y todos los agentes de mediación, incluida la UE y los miembros de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación y la Comunidad de Sant'Egidio, acordaron aprobar una hoja de ruta única para un proceso de mediación más amplio.** Los asociados internacionales reafirmaron su apoyo a los esfuerzos del Gobierno para lograr un cese inmediato de la violencia. Ante la crisis del cese de hostilidades, a mediados de julio la Comunidad de Sant'Egidio visitó el país con el objetivo de contribuir a la formación de un comité nacional que impulsara el acuerdo de alto el fuego del 19 de junio.

En este sentido, el 17 de julio, en Libreville, **representantes de la UA, la CEEAC y la CIRGL, así como los Ministros de Exteriores de Angola, el Chad, el Gabón, la RCA y la Rep. del Congo, aprobaron una hoja de ruta integrada (Roadmap for Peace and National Reconciliation) para la Iniciativa Africana.** La Iniciativa pretende impulsar la implementación de esta hoja de ruta, unificando todos los esfuerzos de mediación en el país. La hoja de ruta afirma la legitimidad del sistema constitucional del país, la importancia de las conclusiones del Foro de Bangui sobre la Reconciliación Nacional, celebrado en 2015, y la necesidad de una firme titularidad nacional en el proceso de paz para promover la reconciliación. El 29 de agosto, la Comisión de la UA nombró a **Bédializoun Moussa Nébié** como su

Representante Especial para la RCA. Esta nueva hoja de ruta pretende promover el diálogo entre el Gobierno y los grupos armados, así como entre los miembros del Comité Consultivo de Seguimiento sobre Desarme, Desmovilización, Reintegración y Repatriación (DDRR Advisory and Monitoring Committee) con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el desarme general en el país, creando un fondo de contribuciones para implementar la hoja de ruta del acuerdo alcanzado el 17 de julio en Libreville. El secretario general de la ONU copresidió el 19 de septiembre, junto con el presidente centroafricano, el presidente de la Comisión de la UA, y en asociación con la CEEAC, la UE y el BM, una reunión de alto nivel para analizar la situación política y de seguridad en paralelo al 72º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Los participantes condenaron los ataques contra la población civil, expresaron su apoyo al presidente Touadéra y a la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación. Se acordó convocar una reunión del **Grupo de Apoyo Internacional para la RCA** (International Support Group for the CAR, ISG-CAR, creado en agosto de 2016 en sustitución del International Contact Group for the CAR, ICG-CAR) en un plazo de seis meses, para dar apoyo a la reconstrucción postconflicto y a la construcción de la paz.

La Iniciativa dispone de un equipo facilitador que celebró su primera reunión en Bangui el 11 y 12 de septiembre de 2017. Este grupo facilitador está presidido por la UA y cuenta con la participación de representantes de los miembros de la Iniciativa, y se propone facilitar los contactos directos entre las partes. **El Gobierno anunció que Jean Willybiro-Sako sería el coordinador nacional del grupo facilitador.** El presidente, en un intento de cumplir con las exigencias de los grupos armados recalcitrantes y de cara a superar las tensiones internas, nombró a 16 nuevos ministros para que formaran parte de un gabinete ampliado de 34 carteras, que incluía a 18 miembros del Gobierno anterior. Entre los nuevos miembros del gabinete figuraban cuatro representantes de los grupos armados y cinco musulmanes, con lo que el número de representantes musulmanes aumentó a ocho. La creación de 11 nuevos ministerios impondrá una carga adicional al presupuesto del Estado. En lo que respecta a la **perspectiva de género**, entre los nombramientos que el presidente hizo en septiembre figuraban cinco mujeres en el nuevo Gobierno, frente a las cuatro que había previamente, lo que, en conjunto, representaba una reducción de la proporción de mujeres en el gabinete. **Estas medidas, que amplían la base política del Gobierno, podrían calmar las tensiones sectarias y crear un entorno más propicio para el proceso de paz.** Esta reestructuración vino acompañada de iniciativas encaminadas a ampliar la autoridad estatal, al nombrar prefectos en todas las 16 prefecturas, aunque ninguno procedente de la comunidad musulmana. De los 73 subprefectos, nombrados en septiembre, eran más étnicamente diversos e incluían a varios miembros activos de grupos ex-Séléka, 21 miembros de las FFAA y 6 mujeres. A finales de 2017, se habían cubierto los

puestos de 14 de los 16 prefectos y la mayoría de los subprefectos, con un importante apoyo de la MINUSCA. En ciertos casos, algunas de las principales facciones armadas se opusieron a ese despliegue, lo que exigió amplias consultas para facilitar la aceptación a nivel local. En este sentido, el 31 de enero de 2018, el FPRC declaró que aceptaba a los prefectos de Vakaga, Nana Grebizi y Bamingui-Bangoran. Según el Frente, tomaba esta decisión en respuesta a los llamamientos de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación y antes de que se celebrara la segunda ronda del grupo de facilitadores de la Iniciativa. En noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación del contingente militar en 900 soldados (alcanzando los 13.000) y en diciembre aprobó una excepción al embargo de armas para que Rusia pudiera suministrarlas a las FFAA formadas por la misión de la UE. El 16 de febrero de 2018 **el panel facilitador de la Iniciativa celebró su tercera reunión con los 14 grupos armados del país en Bangui.**

Cabe destacar que en un contexto de aumento de la violencia y firmas de ceses de hostilidades parciales entre grupos, como el alcanzado el 9 de octubre entre tres facciones ex Séléka (FPRC, UPC y MPRC) y el anti-balaka Rassemblement des Republicains en las provincias de Ouaka and Basse-Kotto, **continuaron las conversaciones con los grupos armados, en el marco del Comité Consultivo de Seguimiento sobre Desarme, Desmovilización, Reintegración y Repatriación, aunque con progresos limitados.** En varias reuniones las autoridades nacionales cuestionaron a los grupos armados acerca de la inseguridad imperante, al tiempo que entablaban un diálogo directo con ellos. A pesar de la participación del FPRC en el Comité, el grupo siguió apoderándose de nuevos territorios y construyendo nuevas estructuras militares, anunciando el despliegue a Bria y Kaga Bandoro de nuevas brigadas “mixtas” integradas por elementos del Movimiento Patriótico por la República Centroafricana (MPRC). Aún no estaba claro si la inclusión de miembros del FPRC en el Gobierno ayudaría a reducir sus actividades militares desestabilizadoras.

RDC	
Actores negociadores	Gobierno, Alianza por la Mayoría Presidencial, oposición política y social agrupada en la coalición Rassemblement (partido Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), la Oposición Dinámica y el G7, entre otros), Union pour la Nation Congolaise y otros partidos políticos
Terceras partes	Conferencia Episcopal Congolese (CENCO), Angola, Tanzania, Uganda, Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, UA, SADC, Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), UE, ONU, OIF y EEUU

Acuerdos relevantes	Acuerdo de Sun City, Acuerdo de Pretoria y Acuerdo de Luanda (2002); Acuerdo Global e Inclusivo sobre la Transición (2002); Acuerdo de Paz Inclusivo y Global en la RDC (2016)
----------------------------	--

Síntesis:

Las demandas de democratización en los años noventa acabaron en una sucesión de rebeliones culminando en la conocida como “primera guerra mundial africana” (1998-2003). La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política y los principales actores insurgentes, en un acuerdo de reparto del poder político. A partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en 2005. En 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de tensión y acusaciones de fraude. En las elecciones de 2011, en las que también venció Kabila, se cometieron numerosas irregularidades y contribuyeron a avivar la inestabilidad, y desde entonces el debate político se centró en el fin de su segundo mandato. En la profunda crisis actual confluyen las promesas frustradas de democratización (incumplimiento de la Constitución y la celebración de elecciones en los plazos acordados), la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno depende cada vez más de fuerzas de seguridad en gran parte disfuncionales. El intento del presidente Kabila de permanecer en el poder más allá de su segundo y último mandato constitucionalmente permitido, que concluía el 19 de diciembre de 2016, está malbaratando más de una década de progreso. La mayoría gubernamental espera retener el poder retrasando las elecciones presidenciales, mientras que la oposición pretende forzar el inicio de una rápida transición que culmine con el fin del mandato de Kabila y elecciones. La UA facilitó el diálogo político entre el Gobierno y las diferentes plataformas y partidos opositores, aunque fue la Conferencia Episcopal (CENCO) la que consiguió aproximar al Gobierno y a la principal coalición opositora, Rassemblement, a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo el 31 de diciembre de 2016.

Aunque el Gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo el 31 de diciembre de 2016, según el cual se iniciaba

una fase de transición en la que el presidente Joseph Kabila permanecía en el cargo hasta la celebración de las elecciones presidenciales en diciembre de 2017, **la aplicación de dicho acuerdo fue lenta, incompleta y no inclusiva, lo que se sumó a un empeoramiento del contexto socioeconómico y un aumento de la represión** por las fuerzas de seguridad nacionales, que alimentaron el descontento en la capital y en los principales centros urbanos. **Así, el país permaneció afectado por la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016** y el aplazamiento de las elecciones nacionales, así como por **la grave escalada de la violencia en la región de Kasai.**

Diferentes factores contribuyeron a empeorar el contexto político y social. En primer lugar, la muerte

del histórico opositor, Étienne Tshisekedi, líder del partido opositor UDPS, afectó a la implementación del acuerdo de paz. Miembro del Gobierno de Patrice Lumumba y posteriormente eterno opositor del régimen cleptocrático de Mobutu Sese Seko, que también ocupó por cuatro veces la cartera de primer ministro en el país, representaba la lucha por la democracia y la defensa del multipartidismo en RDC. **Su liderazgo era reconocido en medio de una oposición fragmentada. Su muerte provocó una lucha por el liderazgo y divisiones en el seno del partido UDPS y del resto de la oposición de cara a liderar la nueva etapa que fueron aprovechadas por la mayoría presidencial.** En segundo lugar, la creciente violencia e inseguridad en la región de Kasai, que generó preocupación por sus consecuencias en torno a la implementación del acuerdo y la convocatoria electoral. En tercer lugar, la oposición política y social intentó mantener durante el año la presión sobre el Gobierno y la mayoría presidencial con movilizaciones y protestas de cara a dar cumplimiento al acuerdo del 31 de diciembre y convocar elecciones antes de finales de 2018, con un seguimiento desigual y que fueron reiteradamente reprimidas con dureza por parte de los cuerpos de seguridad, en un creciente uso de la fuerza que causó decenas de víctimas mortales y centenares de heridos durante todo el año. Aunque fueron más moderadas que en años anteriores, debido a la represión sistemática por parte de los cuerpos de seguridad y la fragmentación de la oposición, el Gobierno incrementó la presión. Según destacó la ONU, el espacio democrático continuó reduciéndose, y existieron violaciones de los derechos civiles y políticos, en particular las libertades de reunión pacífica, de opinión y de expresión. Algunos periodistas, opositores políticos y activistas de la sociedad civil seguían siendo objeto de amenazas, acoso y violencia.

Uno de los principales componentes del acuerdo era la creación de un Gobierno de transición hasta la celebración de las futuras elecciones. No fue hasta abril cuando Kabila seleccionó a Bruno Tshibala como nuevo primer ministro. Tshibala era un disidente del principal

La muerte del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi abrió una lucha en torno al liderazgo en la oposición en RDC aprovechado por la mayoría gubernamental

partido opositor del país, UDPS, lo que fue visto como una táctica del Gobierno para sacar provecho de la división en la oposición. En su Gobierno, nombrado en mayo, había diversos tránsfugas de la oposición que se habían acercado a la Mayoría Presidencial (MP) y los puestos clave permanecieron en manos de la MP. La designación de los miembros del Consejo Nacional para la Supervisión del Acuerdo (CNSA) fue motivo de tensión, así como su presidencia. No fue hasta julio que el Gobierno nombró al CNSA y éste escogió como presidente a Joseph Oleghankoy, histórico opositor tachado de tránsfuga por parte de la oposición política.

En julio la CENI declaró que era imposible organizar las elecciones en 2017, tal y como establecía el acuerdo de 31 de diciembre de 2016, ya que aunque el registro de

votantes estaba prácticamente acabado, con retrasos en Kasai debido a la situación de seguridad, había todavía numerosas cuestiones logísticas, técnicas y de financiación del proceso pendientes de resolver que impedían avanzar el mismo proceso. La CENCO remarcó que esta decisión debía ser producto de un diálogo en el marco del CNSA, y la oposición política condenó el anuncio. En agosto un grupo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil publicó su sexto informe sobre los modos de hacer efectivo el acuerdo de 31 de diciembre de 2016, destacando la falta de voluntad política para aplicar el acuerdo, la responsabilidad compartida de los signatarios con respecto a la crisis política, y el dominio que la mayoría gobernante ejercía en la escena política, así como la división de la oposición y una sociedad civil marginada. El grupo de trabajo destacó la necesidad de adoptar un calendario electoral consensuado, de conformidad con el acuerdo político, dando prioridad a las elecciones presidenciales. El 18 de agosto, 32 representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron en París y firmaron el “Manifiesto del Ciudadano Congolés”, entre ellas LUCHA, Filimbi y la nueva Congolais Debut, en el que se exhortaba al pueblo congolés a tomar medidas no violentas para obligar a Kabila a dimitir si las elecciones no se celebraban en diciembre de 2017. Los dirigentes de Rassemblement expresaron su apoyo al manifiesto.

En octubre la CENI declaró que tras culminar el registro de votantes, necesitaría más de 500 días para organizar las elecciones, previendo un calendario que se prolongaría hasta mediados de 2019, lo que provocó el rechazo internacional y fue calificado por el líder opositor Félix Tshisekedi como una declaración de guerra. EEUU anunció que un calendario que pospusiera las elecciones más allá de 2018 perdería el apoyo internacional. Finalmente, el 5 de noviembre la CENI publicó el calendario electoral. **Éste prevé la celebración de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y provinciales el 23 de diciembre de 2018 y el nombramiento del presidente en enero de 2019, más de un año más tarde respecto al acuerdo del 31 de diciembre de 2016.** La oposición política y la sociedad civil unánimemente rechazaron el calendario, y el anuncio provocó la convocatoria de nuevas huelgas y movilizaciones con seguimiento desigual en diversas localidades para mostrar el rechazo ante el retraso electoral y el mantenimiento en el poder del presidente Joseph Kabila. Estas movilizaciones fueron prohibidas y sistemáticamente dispersadas. Numerosos miembros de la oposición fueron detenidos. El Gobierno justificó el retraso electoral por la situación de seguridad y por dificultades logísticas y técnicas. La Conferencia Episcopal (CENCO) realizó un llamamiento a Kabila para que hiciera una declaración pública en la que asegurara que él no sería candidato a su reelección. El Consejo de Seguridad de la ONU validó el calendario electoral presentado y, junto a la UA y la CENCO, insistieron en que no se produjeran nuevos retrasos.

El nuevo calendario electoral prevé la celebración de las elecciones en RDC dos años después de lo previsto, en diciembre de 2018

EEUU y la UE establecieron sanciones a altos cargos de los cuerpos de seguridad y diversas organizaciones y países amenazaron con interrumpir el flujo de recursos al país en caso de nuevos incumplimientos. El 19 de diciembre, un año después del fin del segundo y último mandato de Kabila, se convocó una nueva movilización con bajo seguimiento, y el año finalizaba en medio de un clima de preocupación y pesimismo por la evolución negativa de la situación y la actuación desproporcionada de los cuerpos de seguridad dispersando las manifestaciones convocadas el 31 de diciembre en las que murieron siete personas.

Rep. del Congo	
Actores negociadores	Gobierno, milicias Ninjas y el Consejo Nacional de los Republicanos (CNR) de Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi)
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Kinkala (diciembre de 2017)

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, el país se ha visto sometido a un clima de inestabilidad y violencia política. Denis Sassou-Nguesso lo gobernó desde 1979 –a través de un golpe de Estado militar– hasta 1992, etapa de régimen de partido único de ideología marxista-leninista. Tras el colapso del bloque comunista y de la Unión Soviética, y por presiones de su principal aliado, Francia, inició la transición a la democracia, estableciendo un sistema multipartidista que celebró elecciones en 1992 en las que Sassou-Nguesso fue derrotado por Pascal Lissouba. El país ha sido víctima de diversos conflictos armados (1993-1994, 1997-1999). La capital, Brazzaville, resultó destruida por la guerra y la multitud de milicias que competían por el poder. Entre ellas, las milicias Ninjas leales a Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi) y al líder político Bernard Kolélas, primer ministro tras el acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre 1993 y 1994; las milicias Cocoyes, del presidente derrocado Lissouba; y las Cobras, del presidente golpista Nguesso. El apoyo de Francia a Nguesso fue un factor crucial en esta guerra, que terminó con la invasión de las tropas de Angola y el retorno de Nguesso al poder, el cual ha continuado en el cargo hasta la actualidad. Sassou-Nguesso ha recibido numerosas críticas por nepotismo, recortar la democracia y las libertades en el país, y sus Gobiernos se han visto plagados de casos de corrupción. Los Ninjas del reverendo Ntoumi siguieron activos en su feudo, la región de Pool, y se enfrentaron a Nguesso entre 2002 y 2003. Los intentos de Nguesso de reformar la Constitución para facilitar su permanencia en el poder provocaron importantes movilizaciones en su contra protagonizadas por el movimiento #Sassoufit, creado en 2014, en referencia al lema de las movilizaciones. El Gobierno promovió la reforma constitucional en 2015, que abrió la puerta a la celebración de las elecciones presidenciales en marzo de 2016 tachadas de fraudulentas y ganadas por Nguesso, abriendo una nueva fase de inestabilidad. Se han producido diversos contactos para promover un proceso de paz entre el pastor Ntoumi y el Gobierno.

En los últimos años el país se ha visto inmerso en un ciclo de inestabilidad y movilización política y social desde que el Gobierno promovió la reforma constitucional en

octubre de 2015 que levantaba el límite de dos mandatos presidenciales, lo que permitió al presidente, Denis Sassou-Nguesso (72 años), presentarse a un nuevo mandato presidencial en marzo de 2016, en las que venció y consiguió ampliar sus 32 años en el poder. Los resultados fueron rechazados por sus opositores, que hicieron un llamamiento a promover una campaña de desobediencia civil. Tras las elecciones se intensificó la violencia, que continuó en 2017 y el **Gobierno reprimió con dureza las protestas, supuestamente lideradas por las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi**. Estas antiguas milicias habían sido lideradas por el que fue primer ministro, Bernard Kolélas, padre del actual candidato presidencial Guy Brice Parfait Kolélas, y por el pastor Ntoumi, desde los años noventa. Parfait Kolélas negó tener ningún tipo de relación con el grupo. No obstante, Ntoumi manifestó su apoyo al candidato Guy Brice Parfait Kolélas, derrotado en las elecciones. La crisis se intensificó a partir de septiembre de 2016, cuando se produjo una nueva escalada de la violencia y de acciones por parte de las milicias Ninjas en la región de Pool que continuó en 2017. Ntoumi afirmó que sus jóvenes habían retomado las armas como consecuencia de las elecciones fraudulentas de marzo y en respuesta a la violencia gubernamental que se intensificó desde la reelección de Nguesso. Ntoumi hizo un llamamiento para el establecimiento de un diálogo mediado por la comunidad internacional. En este sentido, durante 2017 persistió la inestabilidad en la región de Pool y las acciones por parte de las milicias Ninjas contra los cuerpos de seguridad, en paralelo a la celebración de contactos entre actores gubernamentales y sectores vinculados a las milicias Ninjas de Ntoumi. El 8 de junio la ONU afirmó que 81.000 personas se habían desplazado en la región de Pool desde el inicio de las operaciones contra las milicias Ninjas a mediados de 2016.

En noviembre el Gobierno realizó un gesto de buena voluntad al liberar a dos personas cercanas del entorno del reverendo Ntoumi lo que fue interpretado como una medida de construcción de confianza de cara a facilitar los contactos. Los liberados eran su portavoz y el secretario general del Consejo Nacional de los Republicanos (CNR), Jean-Gustave Ntongo, la formación política del pastor Ntoumi, que habían permanecido detenidos durante varios meses. **Estos pasos contribuyeron a que el Gobierno congolés firmara un acuerdo de alto el fuego con representantes opositores del reverendo Ntoumi en la región de Pool en Kinkala el 23 de diciembre.** El ministro de Interior congolés Raymond Zéphyrin Mboulou supervisó la firma del acuerdo, que pretende poner fin a la rebelión iniciada contra el Gobierno en abril de 2016, tras la reelección de Sassou-Nguesso en las elecciones celebradas en esa fecha. El secretario general del CNR, Jean-Gustave Ntongo, la formación política del pastor Ntoumi, anunció la entrada en vigor del acuerdo. Según el acuerdo, el reverendo Ntoumi se compromete a facilitar el desarme de sus combatientes, la restauración de la autoridad estatal en Pool, y el

El Gobierno congolés y el pastor Ntoumi alcanzaron un acuerdo de alto el fuego a finales de 2017

Gobierno se compromete a garantizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración social y económica de los ex combatientes, así como el reasentamiento de la población desplazada por la violencia en la zona y la libertad de movimiento. Se prevé la creación de una comisión conjunta que deberá supervisar la implementación del acuerdo.

Sudán	
Actores negociadores	Gobierno de Sudán, coalición opositora "Sudan Call" formada por partidos de oposición nacional y Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur)
Terceras partes	African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Hoja de Ruta (2016)

Síntesis:

En el país se mantienen abiertos diferentes conflictos armados (Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur), así como tensiones entre el Gobierno y la oposición. En medio de este clima de inestabilidad política, a principios del 2014, el presidente sudanés, Omar al-Bashir, hizo un llamamiento al "diálogo nacional" para hacer frente a los problemas políticos y económicos que permitiera afrontar la pobreza, la guerra y la inestabilidad política en todo el territorio nacional. El Gobierno anunció que dicho diálogo tendría cuatro objetivos prioritarios: lograr la paz, proteger los derechos constitucionales, revigorizar la economía y revivir la identidad nacional. El Ejecutivo sudanés manifestó que la iniciativa no excluía a ningún sector y que era el momento de realizar reformas, después de 25 años de régimen. La propuesta contó desde sus inicios con la implicación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki y del African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP) para promover negociaciones de paz y una transformación democrática.

El proceso de paz en Sudán se vio afectado en 2017 por las divergencias entre Gobierno, que afirmó avanzar en la implementación del Diálogo Nacional oficialmente concluido en 2016 –boicoteado por la oposición política mayoritaria y las principales insurgencias–, y la oposición, que acusó al Gobierno de perpetuarse en el poder. El presidente sudanés anunció en marzo avances en la implementación del diálogo nacional, con el nombramiento del hasta entonces vicepresidente primero Bakri Hassan Saleh como primer ministro. Si bien la medida suponía la recuperación de un cargo político eliminado tras el golpe de Estado de 1989, la designación de Saleh, del partido oficialista, desoía el acuerdo previo que contemplaba la designación de un representante de la oposición y, además, implicaba la acumulación de cargos de Saleh, que mantuvo su vicepresidencia. El primer ministro anunció en mayo un nuevo gobierno (31 ministros, de los cuales solo cuatro mujeres), calificado de consenso nacional, si bien dominado por el oficialista NCP, y que afronta el

reto de implementar las recomendaciones emanadas del Diálogo Nacional, así como la adopción de una nueva carta magna. El nuevo ejecutivo fue criticado por diversos partidos opositores, que rechazaron sumarse, incluyendo la alianza Sudan Call. El presidente del partido opositor Umma, Sadiq al-Mahdi, retornado en febrero del exilio en que había permanecido desde 2014, denunció en junio la situación de oportunidad perdida que afrontaba el diálogo nacional, acusando al gobierno de falta de implementación total de las recomendaciones emanadas de los comités del Diálogo Nacional, sumándose así a otras críticas opositoras sobre el rumbo seguido por el proceso para consolidar el poder del régimen. Por su parte, el presidente sudanés instó en diversos momentos del año a la oposición política a sumarse al proceso de reconciliación.

Por otra parte, el disputado diálogo nacional –en relación al cual la hoja de ruta firmada en 2016 por el Gobierno e insurgencias reconocía que no había sido suficientemente inclusivo- continuó sin sumar a las insurgencias armadas del país, mientras tampoco se avanzó en el llamado proceso de doble vía (negociaciones en Darfur entre Gobierno y el SLM-M y el JEM, y en las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul entre el Gobierno y el SPLM-N), facilitado por el Alto Panel de Implementación de la Unión Africana (AUHIP).⁶ El Gobierno sudanés llamó a las insurgencias del país a abandonar la violencia y sumarse sin precondiciones al proceso de paz y al diálogo nacional. El Gobierno prolongó el alto el fuego en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul en enero por seis meses, de nuevo en julio por cuatro meses y en octubre hasta el 31 de diciembre. El proceso de doble vía se vio afectado por factores como escaladas de enfrentamientos en diversos momentos del año y por las divisiones dentro del SPLM-N, entre otros elementos. A su vez, las insurgencias mantuvieron su rechazo a negociar sobre la base del Documento de Doha para la Paz de 2011.

Sudán (Darfur)	
Actores negociadores	Gobierno, Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW
Terceras partes	UA, UNAMID, Chad
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz de Darfur (DPA) (2006) Acuerdo de Hoja de Ruta (2016)

Síntesis:

La marginación política, económica y cultural de la región de Darfur respecto al conjunto de Sudán se encuentra en las raíces de un conflicto al que a partir de los años ochenta se le une la competencia creciente por los recursos hídricos y la disponibilidad de pastos como consecuencia de la sequía. Junto a esto, la instrumentalización de la religión y las diferencias étnicas contribuyeron decisivamente a agravar la situación, a la que se le unió la interferencia de países vecinos como Chad y Libia. En medio de las

conversaciones de paz para resolver el histórico contencioso entre el norte y el sur del país, diversos grupos armados, principalmente el JEM y el SLA, se rebelaron en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región. En primer lugar, Chad, y posteriormente, la UA, promovieron contactos entre las partes para facilitar el acceso humanitario y entablar negociaciones de paz que condujeran al fin de la violencia. En 2006 se alcanzó un acuerdo de paz, el Darfur Peace Agreement (DPA) en Abuja, que sólo incluyó a una facción del SLA, la liderada por Minni Minawi, mientras persistió el conflicto y los intentos frustrados de diálogo, principalmente promovidos por Qatar en el marco del proceso de paz de Doha, al que se fueron sumando los diferentes actores.

El proceso de mantuvo estancado, sin avances desde la firma de la hoja de ruta en 2016 entre Gobierno e insurgencias de Darfur y de las vecinas Dos Áreas. El Gobierno prolongó el alto el fuego unilateral en Darfur – así como en Kordofán Sur y Nilo Azul– en enero por seis meses, de nuevo en julio por cuatro meses y en octubre hasta el 31 de diciembre. Pese a la consideración del Gobierno de que la guerra en Darfur había ya llegado a su fin, durante el año se mantuvo la violencia, si bien en niveles más reducidos que en años anteriores. La Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega) instó en febrero a las partes del acuerdo de hoja de ruta de 2016 –firmado por el Gobierno en marzo de ese año y por las principales insurgencias de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul en agosto de ese año- a implementar lo acordado. También instó al grupo armado SLA-AW, que no se adhirió en 2016 a la hoja de ruta, a un alto el fuego y a sumarse al proceso de paz facilitado por el Alto Panel de Implementación de la Unión Africana (AUHIP). Por su parte, **las principales insurgencias de Darfur mantuvieron su rechazo a negociar sobre la base del Documento de Doha para la Paz de 2011 (DDPD, por sus siglas en inglés)** y mantuvieron sus críticas al Diálogo Nacional por su falta de inclusividad y por el predominio del oficialista NCP. Ante el incremento de la violencia en mayo y principios de junio en Darfur Este y Norte, la Troika así como la UE instaron al Gobierno sudanés y al grupo armado SLM-MM a poner fin a los enfrentamientos. Por su parte, el Gobierno, que acusó al SLM-MM de iniciar los ataques cruzando desde Libia y Sudán del Sur, reclamó a la Troika y la UE el ejercicio de mayor presión sobre las insurgencias para que accedan al proceso negociador.

El JEM y el SLM-MM realizaron a principios de mayo una declaración conjunta de alto el fuego unilateral de seis meses, tras una reunión en París entre el liderazgo de ambas insurgencias y el nuevo representante especial conjunto de la UA y la ONU para Darfur y jefe de la misión híbrida de mantenimiento de la paz en Darfur (UNAMID), Jeremiah Mamabolo. La reunión buscaba reimpulsar el proceso de paz. A su vez, representantes del SLM-MM y del JEM se reunieron con representantes gubernamentales en Berlín en mayo. **Mamabolo señaló en julio que el conflicto armado en Darfur**

6. Véase los resúmenes sobre Sudán (Darfur) y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en este capítulo.

había quedado localizado, mayormente, a la presencia del SLA-AW en la zona occidental de Jebel Marra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló en octubre que los esfuerzos para avanzar hacia la paz mediante un proceso negociado continuaban afrontando dificultades y que pese al proclamado deseo de las partes de proseguir las negociaciones, el establecimiento de precondiciones obstaculizaba el progreso del proceso. Guterres llamó al Gobierno y a las insurgencias a respetar sus altos el fuego unilaterales y a reanudar las conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades. En paralelo, durante el año algunas facciones de menor peso se sumaron al proceso de diálogo nacional. Así, en febrero el SLM-PD, liderado por Al-Sadiq Abdel-Karim, escisión del SLM-AW liderado por Abdel-Wahid al-Nur, firmó el Documento de Diálogo Nacional, precedido por la firma de un acuerdo de paz en enero entre esa facción y el Gobierno de Darfur Norte. El Gobierno anunció en mayo que una escisión del JEM que incluía al ex secretario de organización del JEM Abu Bakr Hamid y el ex secretario humanitario Suleiman Jamous se sumaba al proceso de paz y a la firma del Documento de Diálogo Nacional. El JEM denunció la ausencia de negociaciones serias, calificando los nuevos pasos como de procedimientos de rendición individual. Otra facción escindida del SLM-AW y liderada por el comandante Haroun (alias Kalmang Koi) se unió también al proceso de paz en junio en el estado de Darfur Central.

Por otra parte, el Gobierno anunció en septiembre el lanzamiento de una nueva campaña de desarme en Darfur. Según el presidente sudanés a finales de año solo las fuerzas regulares tendrán acceso a armas. No obstante, el proceso de desarme transcurrió con dificultades, incluyendo graves choques en noviembre entre miembros de las RSF y combatientes leales a Musa Hilal, ex aliado del presidente sudanés, en Darfur Norte, con una decena de fallecidos. Tras la detención de Hilal ese mismo mes, el Gobierno impuso un ultimátum a los grupos armados de Darfur para la entrega de armas.

En relación a la presencia internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en junio una reducción del 30% de las tropas y policía de la misión UNAMID y la reconfiguración de sus operaciones. Por su parte, organizaciones de derechos humanos emitieron alertas sobre los riesgos del repliegue de la UNAMID para la seguridad de la población civil ante la continuación de los abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales. En el marco del repliegue, la UNAMID informó en octubre del cierre de 11 bases de operaciones en Darfur, mientras desarrollaba planes para el despliegue

Las tensiones internas en el SPLM-N llevaron a retrasar el reinicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno sudanés y la insurgencia en Kordofán Sur y Nilo Azul

de la Jebel Marra Task Force, ante una mayor fragilidad de la situación en Jebel Marra. Por otra parte, UNAMID organizó durante el año diversas actividades de promoción de la participación de mujeres en iniciativas de reconciliación en el país, de la mano de organizaciones locales.⁷ La coalición internacional NGO Working Group on Women, Peace and Security instó en enero de 2018 al Consejo de Seguridad a actualizar y dar seguimiento a ese apoyo en siguientes informes sobre la UNAMID, así como proporcionar lecciones aprendidas.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Actores negociadores	Gobierno, SPLM-N
Terceras partes	African Union High-Level Implementation Panel (AUHIP), Uganda
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Hoja de Ruta (2016)
Síntesis:	La secesión de Sudán del Sur en julio de 2011 y la reconfiguración nacional que supuso para Sudán agravó las tensiones entre las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul con el Gobierno sudanés, ya que durante el conflicto armado sudanés ambas regiones habían apoyado a la insurgencia sureña del SPLA. Tras la independencia sursudanesa, el SPLM-N ha mantenido la lucha armada en ambas regiones, exigiendo la introducción de reformas democráticas y la descentralización efectiva que permita el desarrollo económico de todas las regiones del nuevo Sudán, así como el reconocimiento de la pluralidad étnica y política. Desde ese momento la AUHIP ha mediado para buscar una resolución pacificada entre las partes, que gira en torno a tres principales ejes en las negociaciones de paz: el modelo de cese al fuego; el tipo de acceso humanitario a las dos áreas (a través de las líneas del frente o mediante la vía transfronteriza); y las características y agenda del Diálogo Nacional.

El proceso de paz se mantuvo estancado, sin avances desde la firma del acuerdo de hoja de ruta en 2016 entre el Gobierno y las insurgencias de Kordofán Sur y Nilo Azul así como de la vecina Darfur, a pesar de algunos gestos de buena voluntad durante el año, y se vio afectado por las divisiones internas en el SPLM-N. El proceso negociador había quedado paralizado tras la firma de la hoja de ruta alcanzada en 2016 –firmada por el Gobierno en marzo y por las insurgencias en agosto– ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades y de acceso humanitario a Darfur y las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul). El Gobierno prolongó su alto el fuego unilateral en las Dos Áreas, así como en Darfur en enero por seis meses, de nuevo en julio por cuatro meses y en octubre hasta el 31 de diciembre. No obstante, ya en febrero el SPLM-N acusó al Gobierno de violaciones del alto el fuego. Se produjeron algunas medidas de confianza,

7. Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur*. 27 de diciembre de 2017, S/2017/1113.

como la liberación en marzo por parte del SPLM-N de 125 presos, en su mayoría soldados, con el apoyo facilitador de Uganda, Sudán del Sur y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pocos días después el Gobierno liberó a 259 insurgentes capturados en los últimos años, si bien no especificó a qué insurgencias pertenecían. De esa cifra, 66 afrontaban sentencias de muerte, incluyendo 44 apresados en combates en Omdurman (estado de Jartum) y 18 en Donkey Basshim (Darfur Occidental). El Gobierno calificó su medida de liberación de presos como un paso hacia la paz duradera en el país.

Las divisiones dentro del SPLM-N afectaron al proceso de paz durante el año. Su vicepresidente Abdel-Aziz al-Hilu dimitió en marzo por desacuerdos con su máximo dirigente, Malik Agar, y con la posición negociadora del grupo, contraria a plantear la cuestión de la autodeterminación de las Montañas Nuba, como defendía al-Hilu. El Consejo de Liberación de las Montañas Nuba, órgano político del SPLM-N, aprobó en junio relegar a Agar y nombrar a al-Hilu como nuevo líder y comandante general, así como retirar también al secretario general y principal negociador Yasir Arman, e impedirles entrar en áreas bajo control del grupo. El órgano político justificó las medidas en la negativa de Agar y Arman a incluir la cuestión de la autodeterminación de las Montañas Nuba en las negociaciones con el Gobierno. Se produjeron choques entre las facciones en diversos momentos del año, como en mayo, julio y agosto, éstos últimos con varias decenas de fallecidos. La conferencia general celebrada por el SPLM-N en octubre ratificó a al-Hilu como nuevo líder y reiteró la demanda de autodeterminación, mientras cerró la puerta al acercamiento con la facción liderada por Agar. Las tensiones internas en el SPLM-N llevaron a retrasar el reinicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados de Kordofán Sur y Nilo Azul, previstas inicialmente para abril bajo la mediación del negociador jefe de la UA, Thabo Mbeki, en el marco del Alto Panel de Implementación de la Unión Africana (AUHIP). Mbeki y el SPLM-N acordaron retrasar hasta julio el diálogo, con el fin de que el grupo armado resolviera su crisis interna. No obstante, continuaron los choques entre las facciones. El equipo mediador se reunió en agosto con ambas facciones, sin que pudiera fijar una posición conjunta. Representantes gubernamentales afirmaron en septiembre que no negociarían con la facción de Agar, por su falta de capacidad de implementación de posibles acuerdos. Por su parte, tras la imposición de al-Hilu en el SPLM-N, éste afirmó que no había habido una partición de la insurgencia sino un cambio de liderazgo, mientras que la facción de Agar propuso una delegación conjunta o una coordinación entre ambos sectores de cara al reinicio del proceso. El Gobierno valoró positivamente en noviembre el llamamiento del SPLM-N al-Hilu a un reinicio del proceso negociador sobre la base de la hoja de ruta y en enero de 2018 anunció que se reanudarían las conversaciones de paz con el SPLM-N al-Hilu en febrero.

Sudán del Sur

Actores negociadores	Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLA-IO), SPLM7, SSDM-Cobra Faction
Terceras partes	“IGAD Plus”: IGAD, que integra a Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda; UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz (2015), Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario, de 21 de diciembre de 2017

Síntesis:

Después de años de conflicto armado que enfrentó al Gobierno central de Sudán y el sur del país, liderado por la guerrilla del SPLM/A, Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en 2011, tras la realización del referéndum previsto en el acuerdo de paz de 2005 (Comprehensive Peace Agreement –CPA–) facilitado con la mediación de la IGAD. La firma de la paz entre Sudán y Sudán del Sur y la consecución de la independencia no han logrado, sin embargo, acabar con la conflictividad y la violencia. Sudán del Sur ha seguido envuelto en una serie de conflictos internos promovidos por disputas por el control de territorio, ganado y poder político, así como por las prácticas neopatrimoniales y la corrupción en el seno del Gobierno, que no han permitido lograr la estabilidad y consolidar la paz. Como parte de las negociaciones de paz impulsadas en abril de 2013, el presidente ofreció una amnistía a seis comandantes de grupos rebeldes que no tuvo buenos resultados iniciales. Posteriormente, en diciembre de 2013, las tensiones entre las facciones leales al presidente Salva Kiir y las leales al ex vicepresidente Riek Machar, SPLM/A-in-Opposition (SPLA-IO), dieron paso a una nueva escalada de violencia en diversas regiones del país. En enero de 2014, y a través de la mediación de la IGAD, el Gobierno y el SPLA-IO iniciaron conversaciones de paz en Addis Abeba (Etiopía). Los esfuerzos diplomáticos se han encontrado con muchos obstáculos para lograr acuerdos de alto el fuego efectivos, habiendo firmado nueve compromisos diferentes entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, de cese de hostilidades y medidas transitorias que han sido sistemáticamente violados, lo cual había impedido sentar las bases de una solución política al conflicto. El 17 de agosto de 2015, y tras fuertes presiones internacionales y amenazas de bloqueos y sanciones económicas, las partes firmaron un acuerdo de paz promovido por la IGAD Plus, aunque persisten muchas incertezas sobre su implementación.

Las partes contendientes realizaron pocos progresos de cara a alcanzar la paz en el conflicto que padece Sudán del Sur. Persistió la grave situación humanitaria, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales) y un clima de inseguridad reinante. Según OCHA, en noviembre de 2017 había 1,86 millones de personas desplazadas internas y 2,1 millones de personas refugiadas en los países vecinos. Sudán del Sur se convirtió en 2017 en uno de los países donde es más peligrosa la acción humanitaria, con la muerte de 28 trabajadores humanitarios. En la segunda parte del año se reactivó el proceso político con la celebración de dos reuniones de un foro para reactivar el proceso de paz impulsado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el llamado Foro de Alto Nivel para la Revitalización del proceso de paz, y se firmó el Acuerdo

sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario. Sin embargo, la desconfianza entre las partes y el incumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados fue constante. **La implementación del Acuerdo de Paz de agosto de 2015 se fue deteriorando a lo largo del año 2016 y en julio de ese año estallaron nuevamente enfrentamientos en Juba causando centenares de víctimas mortales, según las fuentes, que condujeron al colapso del acuerdo. En septiembre de 2016 Riek Machar, líder del SPLA-IO, emitió un comunicado desde Jartum, en el que daba por colapsado el Acuerdo de paz y llamaba a sus seguidores a retomar la guerra contra el Gobierno.** Desde entonces y durante todo el 2017 reinó un clima de violencia e inseguridad, a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional y los esfuerzos de la IGAD para reactivar el proceso de paz. La aplicación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (el “Acuerdo de Paz de 2015”) siguió en gran medida paralizada, sin avances significativos para garantizar una mayor inclusividad en el Gobierno de Transición de Unidad Nacional. No obstante, **el 22 de mayo de 2017, el presidente Salva Kiir puso en marcha oficialmente un proceso de diálogo nacional**, en presencia del presidente Museveni de Uganda, y tomó juramento a los 60 miembros del Comité presentes en Juba. **También anunció un alto el fuego unilateral para crear un entorno propicio al diálogo y facilitar la asistencia humanitaria, ordenó a los órganos de seguridad que no detuvieran a los miembros de la oposición que desearan sumarse al diálogo y dispuso la revisión de la situación de los presos políticos.** El 31 de mayo, el presidente Kiir nombró a tres mujeres al órgano de dirección del Comité Directivo del Diálogo Nacional, compuesto por nueve miembros, según el informe del secretario general de la ONU de junio. Sin embargo, de acuerdo con las cifras de junio de 2017 de la coalición de organizaciones de mujeres Women’s Monthly Forum on the Peace Process (WMF), en el Diálogo Nacional solo había 18 mujeres, de un total de 110 personas, y todos las posiciones de co-presidentes, secretarios y diputados las ocupaban hombres. La WMF presentó en 2017 recomendaciones para fortalecer la participación de mujeres y la perspectiva de género en el proceso de paz, resultantes de una investigación del WMF sobre el acuerdo de paz de 2015.⁸

Sin embargo, **este cese unilateral de hostilidades no puso fin a las operaciones de ofensiva llevadas a cabo por el SPLA (FFAA gubernamentales leales a Salva Kiir), lo que supone un flagrante incumplimiento de su propio compromiso**, tal y como señaló el informe del secretario general de la ONU de junio de 2017. Las reuniones plenarias del Comité Directivo de Diálogo

El Gobierno de Sudán del Sur promovió la celebración del Diálogo Nacional, que no contó con la participación de importantes sectores de la oposición y fue tachado de no inclusivo

La IGAD consiguió celebrar un foro para revitalizar el proceso de paz que culminó con un acuerdo de cese de hostilidades, pero las partes lo incumplieron

Nacional se celebraron entre el 29 de mayo y el 22 de junio. Los copresidentes de la iniciativa declararon su intención de celebrar consultas con los dirigentes de la oposición dentro y fuera del país, entre ellos Riek Machar. El Plenario estableció 15 subcomités encargados de organizar consultas temáticas y a nivel local. Dos delegaciones especiales se pusieron en contacto con importantes figuras de la oposición residentes fuera del país, en Jartum y Nairobi. El 28 de junio, el copresidente del Comité Directivo se puso al frente de una delegación especial que viajó a Sudáfrica para entablar contacto con Riek Machar, aunque no pudo reunirse con él. Otras delegaciones viajaron a Jartum, Addis Abeba y Nairobi para tratar de contactar con figuras destacadas. Del 3 al 28 de julio, con el apoyo técnico de la ONU y otros asociados, el Comité Directivo organizó un seminario sobre la experiencia adquirida por sus miembros en la gestión de los diálogos. El 28 de julio, el Comité Directivo anunció los preparativos para iniciar en septiembre las consultas a nivel subnacional. No obstante, diversos grupos de la oposición rechazaron el Diálogo Nacional en su formato actual por no ser una plataforma inclusiva ni contar con las condiciones para que se pueda celebrar un diálogo genuino. El mismo secretario general de la ONU señaló que aunque el Comité Directivo del Diálogo Nacional había hecho lo posible para que el proceso de diálogo fuese más ampliamente representativo y participativo, los principales líderes de la oposición siguieron expresando su escepticismo en cuanto a la credibilidad y el carácter inclusivo del proceso.

En paralelo, y ante este estancamiento de la situación, la IGAD dio un paso adelante y celebró su 31ª cumbre extraordinaria sobre Sudán del Sur el 12 de junio, en Etiopía, donde decidió convocar a las partes en el acuerdo de paz, y también a los grupos marginados del pacto, a un **Foro de Alto Nivel para la Revitalización del Acuerdo de 2015** con el fin de restablecer un alto el fuego permanente y dar cumplimiento al acuerdo de paz. Desde entonces, la IGAD estuvo promoviendo este Foro en lo que considera un último intento de reencauzar el proceso de paz. En este sentido, realizó reuniones por separado con diferentes actores (Gobierno, oposición y actores de la sociedad civil) en octubre. Una delegación de la IGAD se reunió con el líder de la oposición y ex primer vicepresidente Riek Machar en Sudáfrica, donde se encuentra exiliado desde 2016, el 4 de octubre. Sin embargo, no fue hasta finales de año que se dio un impulso al proceso de paz. El Gobierno siguió dinamizando el Diálogo Nacional, a pesar de las críticas internas e internacionales, y en paralelo, el ugandés Yoweri Museveni estuvo impulsando una iniciativa de

8. Women’s Monthly Forum on the Peace Process, *South Sudan: Gender Analysis of the Peace Agreement*, enero de 2016.

cara a reunificar las diferentes facciones del SPLM, de cara a contribuir al proceso de paz más amplio. En este sentido, diversas facciones del SPLM consiguieron firmar un acuerdo de reunificación en El Cairo, en noviembre. No obstante, la facción del SPLM liderada por el antiguo vicepresidente Riek Machar rechazó el acuerdo de reunificación, afirmando que no servía a los intereses del país. Egipto acogió la reunión de reunificación celebrada entre el 13 y el 16 de noviembre. Otros encuentros para promover la reunificación tuvieron lugar en la capital ugandesa, Kampala. El acuerdo, firmado en el cuartel general de los servicios de inteligencia egipcios bajo los auspicios del presidente Abdel Fatah al-Sisi y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, unificó las facciones del SPLM-FD liderada por Pagan Amum y la liderada por el Gobierno de Salva Kiir (representada en la firma por su ministro de Defensa, Kuol Manyang). Este pacto pretende impulsar el acuerdo de reunificación alcanzado en Arusha en 2015.

Tras diversas consultas y reuniones, **la IGAD consiguió convencer a las partes a participar en el Foro de Alto Nivel para la Revitalización.** El Gobierno afirmó el 17 de diciembre que el foro no debía convertirse en una renegociación del acuerdo de paz de 2015, mientras que el SPLM/A-IO al día siguiente reiteró que el acuerdo de 2015 había colapsado tras lo ocurrido en Juba en julio de 2016. A mediados de diciembre el Gobierno reemplazó a varios comandantes y líderes por figuras menos comprometidas con el proceso, según destacó el International Crisis Group. El 18 de diciembre, el Consejo de Ministros de la IGAD inauguró el foro instando a las partes a que se comprometieran a alcanzar un acuerdo de cese de las hostilidades. **Del 18 al 21 de diciembre la IGAD convocó en Addis Abeba la primera fase del Foro de Alto Nivel para la Revitalización del Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur de agosto de 2015.** El 21 de diciembre, 14 partes firmaron el **Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario**, con representantes de las partes interesadas de Sudán del Sur, la IGAD y la UA como garantes y los mediadores de la IGAD y los asociados internacionales como testigos. Las partes signatarias fueron el Gobierno de Transición de Unidad Nacional, el SPLM/A-IO, los “Antiguos Detenidos” del SPLM, el Frente de Salvación Nacional y 10 otros movimientos y partidos de la oposición. Desde el 24 de diciembre, día en que entró en vigor el acuerdo, se denunciaron y verificaron violaciones del cese de hostilidades por ambas partes. En enero, el presidente de la Comisión de la UA y el secretario general de la ONU emitieron una declaración conjunta en la que condenaban las violaciones del acuerdo de cesación de las hostilidades y expresaban la necesidad de establecer consecuencias punitivas a las partes. La Troika formada por Noruega, RU y EEUU, condenaron las violaciones del acuerdo y sugirieron el establecimiento de sanciones y un embargo de armas al Gobierno.

Sudán - Sudán del Sur

Actores negociadores	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur
Terceras partes	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), Egipto, Libia, EEUU, UE
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz global (CPA) (2005); Acuerdo de cooperación (2012)

Síntesis:

El conflicto bélico entre Sudán y su parte meridional, actualmente Sudán del Sur, que duró más de 30 años se caracterizó por una acentuada complejidad cuya naturaleza abordó distintas dimensiones relativas a la cultura y a la historia de ambos países, marcada por dos guerras civiles (1963-1972 y 1983-2005). El Acuerdo de Paz Global (CPA, por sus siglas en inglés) de enero del 2005 estableció la celebración de un referéndum en el sur del país para ratificar la independencia de esta región. La consulta se celebró en enero de 2011 y, después de una clara victoria de los partidarios del sí, en julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia convirtiéndose en un nuevo Estado. Sin embargo, la separación de ambos países no puso fin a las desavenencias entre Jartum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

Las relaciones entre los dos países continuaron siendo frágiles, con acusaciones mutuas de amenazas a la seguridad estatal, si bien a finales de año los dos Gobiernos avanzaron parcialmente hacia la normalización de sus relaciones. Entre las acusaciones, los servicios de inteligencia de Sudán (NISS, por sus siglas en inglés) acusaron en abril al Gobierno de Sudán del Sur de llevar a cabo encuentros ese mes con el SPLM-N, que combate contra el Gobierno sudanés en las Dos Áreas, y de promover con ello la extensión de la guerra en Sudán. Los dos presidentes se reunieron en noviembre en la capital sudanesa para firmar diversos acuerdos sobre seguridad y petróleo. Según el Gobierno sursudanés, el viaje de su dirigente, Salva Kiir, a Sudán buscaba normalizar las relaciones entre ambos países. No obstante, en el marco de la visita, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, acusó al Gobierno sudanés de suministrar armamento que alimenta el conflicto interno en Sudán del Sur, así como de apoyar al líder opositor y antiguo vicepresidente Riek Machar. Pese a ello, **los dos dirigentes acordaron no llevar a cabo acciones militares o políticas que supusieran una amenaza para el país vecino, así como el establecimiento de una zona de seguridad**, según informó el presidente sudanés Omar al-Bashir, que calificó el encuentro de avance para las relaciones bilaterales.

Por otra parte, en relación al proceso negociador para la delimitación de la zona fronteriza pendiente de definir entre ambos países, y que afecta a Abyei, el área 14-

Mile, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka y el enclave de Kafia Kingi, el Comité Técnico Conjunto para la Demarcación de la Frontera (JTCCB, por sus siglas en inglés) desarrolló un informe detallado que abarca los puntos de acuerdo y divergentes, según trascendió de una nueva reunión en diciembre en Addis Abeba. En el encuentro, celebrado bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), participaron los copresidentes sudanés y sursudanés de la JBC, Abdallah al-Sadiq y Darius Garang, respectivamente. Se esperaba la próxima aprobación del informe por la Comisión Conjunta de Fronteras (JBC, por sus siglas en inglés). Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó en mayo y en noviembre el mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) y, con ello prolongó el apoyo que da la misión al Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras (MCVVF). No obstante, **la resolución de noviembre del Consejo de Seguridad advirtió que se trataba de la última renovación del apoyo de la misión al MCVVF si las partes en conflicto no se comprometían con medidas específicas antes del próximo 15 de marzo de 2018**, incluyendo plena libertad de movimiento para la UNISFA, también dentro de la llamada Zona Fronteriza Desmilitarizada Segura (SDBZ por sus siglas en inglés); la apertura de la primera fase de corredores fronterizos; la celebración de al menos un encuentro para reanudar las discusiones sobre demarcación fronteriza; y la reactivación del comité específico sobre la disputada área 14-Mile, entre otras medidas, establecidas ya en 2015 por el secretario general de la ONU en su informe S/2015/439 para la plena operatividad del MCVVF.

En relación a la participación de la población en los esfuerzos de construcción de paz, 80 mujeres representantes de las comunidades misseriya y ngok-dinka –comunidades en conflicto en años recientes– en una localidad del norte de Abyei se reunieron en febrero, en el marco de una de las “jornadas abiertas mundiales sobre mujeres, paz y seguridad”, con el fin de abordar estrategias de promoción de la paz en Abyei. Se trata del primer encuentro de mujeres de ambas comunidades, y contó con asistencia del jefe interino de la UNISFA y otros miembros de la misión, así como de líderes de ambas comunidades.

Magreb - Norte de África

Libia	
Actores negociadores	Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), Cámara de Representantes (CdR), Congreso General Nacional (CGN)
Terceras partes	ONU, Liga Árabe, UA, UE (Cuarteto); Argelia, Egipto, Túnez, Marruecos, EAU, Holanda, Italia, Francia
Acuerdos relevantes	Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat (2015)

Síntesis:

Después de la caída del régimen de Muamar Gaddafi en 2011, Libia ha vivido un proceso de transición con múltiples desafíos políticos, económicos, sociales, institucionales y de seguridad, en un contexto caracterizado por la presencia de numerosos actores armados. Desde 2014, el país norteafricano ha sido escenario de una creciente violencia y convulsión política, que derivó en la conformación de dos grandes polos de poder. Ante esta evolución se han activado iniciativas de mediación lideradas por la ONU que han intentado buscar una salida a la crisis en un proceso no exento de obstáculos debido a las disputas de legitimidad, la diversidad de actores implicados, los múltiples intereses en juego y el persistente clima de violencia en el país, entre otros factores. A finales de 2015, bajo los auspicios de la ONU, se firmó el Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat, en medio de un clima de persistentes divisiones y escepticismo por las previsible dificultades para su implementación.

En línea con lo sucedido el año anterior, a lo largo de 2017 quedaron en evidencia las dificultades para implementar el acuerdo de Skhirat –suscrito en 2015– y al finalizar el año el pacto promovido por la ONU continuaba en entredicho pese a los múltiples esfuerzos por llegar a consensos y favorecer su puesta en práctica. Paralelamente, durante el período continuaron las gestiones de diversos actores regionales e internacionales para intentar facilitar una salida a la crisis libia que, sin embargo, no arrojaron avances significativos durante 2017. Respecto al proceso iniciado por Skhirat, a lo largo del año, la misión de la ONU en el país, UNSMIL –cuyo mandato incluye actividades de mediación y buenos oficios para apoyar la implementación del Acuerdo Político de Libia y el apoyo al proceso de transición en el país– mantuvo intercambios con diversos actores libios para reactivar el proceso político y buscar fórmulas que permitieran superar los obstáculos para hacer efectivo el acuerdo de Skhirat. En este contexto, se identificó un amplio consenso respecto a que determinados aspectos del pacto debían ser modificados para facilitar su implementación. El representante especial de la ONU para Libia y jefe de la UNSMIL, el alemán Martin Kobler –reemplazado en julio por el libanés Ghassan Salamé– se reunió en enero y febrero con el presidente de la Cámara de Representantes (CdR), Agila Saleh, en Túnez, y también con el titular del Alto Consejo de Estado, Abderrahman Swehli, con el fin de trabajar en posibles enmiendas al acuerdo de Skhirat. **El Diálogo Político de Libia actuó como foro consultivo para analizar opciones para abordar algunos de los temas más controvertidos con representantes de múltiples sectores.** La troika valedora del Acuerdo Político de Libia, integrada por la ONU, la Liga Árabe, la UA, decidió integrar también a la UE en enero de 2017 –pasando a denominarse “Cuarteto”– y, en marzo, reiteró su compromiso con el pacto. El contexto estaba afectado entonces por la persistencia de la violencia en el país y por otras dinámicas, como los obstáculos para asentar la autoridad del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) promovido por la ONU y liderado por Fajez Serraj; las divisiones internas en el seno del Consejo Presidencial (otra de las instituciones creadas por el

acuerdo de Skhirat); y la decisión de varias decenas de legisladores de la Cámara de Representantes de votar (en marzo) a favor de retirarse del diálogo auspiciado por la ONU –aunque la moción no consiguió imponerse.

Así, entre abril y mayo fueron designadas las delegaciones de la CdR y del Alto Consejo de Estado para discutir los posibles cambios al acuerdo: un comité de diálogo de la CdR formado por 24 personas, incluyendo tres mujeres, y otro comité del Alto Consejo de Estado de 13 integrantes, con una mujer. Sin embargo, hasta mediados de año estas plataformas no se habían reunido formalmente. Sólo mantuvieron contactos informales (en mayo y julio) en La Haya, bajo el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. Paralelamente, se produjeron encuentros entre altos representantes libios, incluyendo la reunión entre el portavoz de la CdR y el jefe del Alto Consejo de Estado en Italia, en abril; o la reunión en Abu Dhabi (EAU), en mayo, entre el primer ministro Serraj y el opositor general Khalifa Hifter –quien de facto controla la zona este del país y ha ampliado su dominio a otras zonas de Libia– en el primer encuentro en un año entre ambos dirigentes, tras gestiones de Egipto. En este contexto, Serraj hizo en julio su propia propuesta de hoja de ruta para la transición, que entre sus principales puntos incluía un cese el fuego en toda Libia, una fusión progresiva de los parlamentos rivales y la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en 2018. La segunda reunión entre Serraj y Hifter, a finales de julio en Francia, culminó con una declaración de diez puntos que recogía algunas de estas ideas, instando a un cese el fuego, a trabajar por la pronta realización de comicios y a asegurar el territorio frente a actividades de tráfico y terrorismo. Sin embargo, Hifter declaró días después que no sería posible implementar todo lo acordado en París.

La actividad diplomática y política en torno a la crisis libia se intensificó a partir de septiembre, cuando el nuevo enviado de la ONU, Ghassan Salamé, dio a conocer un plan para desbloquear el proceso político en el país norteafricano con tres elementos principales: 1) renegociación de algunos aspectos del acuerdo de 2015; 2) conferencia nacional para revitalizar el liderazgo político para lo que queda de transición; 3) celebración de elecciones. El plan recibió apoyo internacional –incluyendo del Cuarteto– y dio paso a la primera reunión de los comités de diálogo de la CdR y del Alto Consejo de Estado, en Túnez, en septiembre. Cada comité designó delegados, incluyendo una mujer, para formar un comité conjunto (joint drafting committee) que decidió reestructurar el Consejo Presidencial y establecer una nueva autoridad ejecutiva. En noviembre la UNSMIL presentó a ambas partes una propuesta a partir de lo debatido en las conversaciones, pero hasta finalizar el año no había acuerdo en este ámbito. Paralelamente, se activó un proceso de actualización del padrón electoral. Con motivo del segundo aniversario del acuerdo de Skhirat, en diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró que este pacto continuaba siendo el único marco válido para resolver la crisis política libia y advirtió sobre “fechas límite incorrectas” sobre su

vigencia. Pese a ello, Hifter rechazó públicamente el Acuerdo Político de Libia y consideró obsoletas todas las instituciones emanadas del pacto, incluyendo el GAN. En un discurso televisado el mismo día del segundo aniversario del acuerdo de Skhirat, Hifter declaró el vencimiento del pacto y, por tanto, la ilegitimidad de las entidades políticas derivadas de él. En este escenario, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia viajó a Libia y se reunió con Serraj y otros miembros del GAN en Trípoli y con Hifter en Bengasi, con la intención de reimpulsar el proceso de paz.

Además de las iniciativas ya mencionadas, otros países de la zona norte de África, países europeos y organizaciones regionales estuvieron implicados en la cuestión libia durante 2017. Los países vecinos de Libia –Túnez, Argelia, Egipto– mantuvieron diversos encuentros para abordar la situación en el país norteafricano. Egipto promovió reuniones entre delegaciones militares de Misrata y del grupo Ejército Nacional de Libia, vinculado a Hifter, y Marruecos albergó diversas reuniones del enviado especial de la ONU de cara a la implementación del plan de acción. También se mantuvo activo el Comité de Alto Nivel sobre Libia de la UA. Entre sus actividades, una reunión en enero y septiembre en Brazzaville; una visita de integrantes del comité junto con el alto representante de la organización africana para Libia, el ex presidente tanzano Jakaya Kikwete, en mayo; y una reunión en el marco de la cumbre de la UA en Addis Abeba para coordinar una aproximación común a la crisis libia. Cabe destacar que, en paralelo a los esfuerzos en estos niveles, otros estamentos de la sociedad libia incluyendo mujeres, jóvenes, consejos tribales, ONG y municipalidades estuvieron involucrados en esfuerzos de reconciliación a nivel local y comunitario. Informes de la UNSMIL destacaron los resultados de iniciativas bottom-up (desde la base) para facilitar salidas a conflictos locales en localidades como Sabha y Trípoli.

En enero tuvo lugar en Túnez una conferencia dedicada a la agenda para la paz de las mujeres libias. Más de sesenta mujeres participaron en el encuentro, promovido por UNSMIL y UNDP, y acordaron el marco para desarrollar una campaña de coexistencia pacífica a nivel nacional y local. Siete mujeres de las distintas regiones de Libia fueron designadas como “focal points” de la campaña de divulgación, para la cual UNSMIL comprometió apoyo técnico. La UNSMIL tiene como parte de su misión la promoción y apoyo de la participación política de las mujeres libias a través de actividades de capacity-building, con el objetivo de alcanzar una representación de 30% para 2018. En este contexto, se desarrollaron actividades de capacitación de mujeres que forman parte de la CdR; en coordinación con el Ministerio de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Comunitario se lanzó un estudio sobre el liderazgo de las mujeres libias –destacando el reducido porcentaje de mujeres en puestos de decisión–; y se promovió un encuentro sobre lecciones aprendidas en lo referente a la participación de

mujeres libias en el proceso de diálogo político. Como se mencionó previamente, las delegaciones de la CdR y el Alto Consejo de Estado encargadas de abordar los cambios en el acuerdo político de Skhirat de 2015 incluyeron mujeres –tres de 24 y una de 13, respectivamente. El comité conjunto con integrantes de ambas delegaciones –conformado tras la puesta en marcha del plan de la ONU para desbloquear el proceso político en Libia, en septiembre– también incluyó mujeres, una por delegación. UNSMIL les proporcionó asistencia técnica para favorecer que las perspectivas de las mujeres se incorporen en los cambios al Acuerdo Político de Libia.

Marruecos – Sáhara Occidental	
Actores negociadores	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO)
Terceras partes	ONU, Argelia y Mauritania (observadores), Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Acuerdos relevantes	Acuerdo de cese el fuego (1991)

Síntesis:

Los intentos de mediación y búsqueda de una salida negociada al conflicto del Sáhara Occidental derivaron en un acuerdo de cese el fuego en 1991. Desde entonces, y pese a la existencia de un marco formal de negociaciones bajo los auspicios de la ONU, el proceso de paz sobre el Sáhara Occidental no ha fructificado. Las sucesivas propuestas y numerosas rondas de negociaciones no han suscitado un acuerdo entre las partes, que mantienen sus respectivas líneas rojas: Marruecos insiste en su reclamo sobre el territorio y sólo está dispuesto a admitir un estatus de autonomía, mientras que el Frente POLISARIO reivindica la necesidad de llevar a cabo un referéndum que incluya la opción de independencia. Las negociaciones sobre el Sáhara Occidental –reconocido como un territorio pendiente de descolonizar– se han visto determinadas por la asimetría de los actores en disputa, la incapacidad de la ONU para poner en marcha una consulta sobre el futuro del territorio, la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia –apoyo clave para el POLISARIO–, y por el respaldo a Rabat por parte de actores internacionales clave, como EEUU o Francia, lo que ha determinado, en la práctica, una prevalencia de las tesis marroquíes en la aproximación al conflicto.

La situación en el marco del conflicto entre Marruecos y el Frente POLISARIO por el Sáhara Occidental se caracterizó por la persistencia del bloqueo en las negociaciones y por diversas dinámicas que evidenciaron la tensión entre las partes. Uno de los hechos más problemáticos, originado a finales de 2016, tuvo que ver con la tensión en Guerguerat, una zona próxima a la frontera con Mauritania, donde ambas partes desplegaron fuerzas armadas. El episodio se inició después de que Marruecos iniciara obras para asfaltar una carretera en la región, considerada como una “zona tapón” y, por tanto, de acceso restringido a las partes. La medida fue interpretada entonces por el Frente POLISARIO como una violación del alto el fuego. A principios de 2017 la disputa se complicó cuando el grupo saharauí comenzó a bloquear el paso a través de Guerguerat a vehículos civiles y comerciales con insignias

marroquíes o que exhibían mapas donde el Sáhara Occidental formaba parte de Marruecos. Rabat cursó una protesta por la situación y demandó la intervención de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO). En este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, –que durante el primer trimestre de 2017 se reunió con representantes de Marruecos, Argelia y el Frente POLISARIO– hizo un llamamiento a las partes a replegar sus fuerzas del territorio en disputa y les recordó la importancia de crear un entorno favorable para la reactivación del diálogo político. El Consejo de Seguridad de la ONU admitió que la crisis en Guerguerat había alentado algunas dudas profundas sobre el mantenimiento del cese el fuego e instó al secretario general de la ONU a explorar fórmulas para abordar el tema. Marruecos decidió retirar sus tropas en febrero de 2017. El Frente POLISARIO, en tanto, anunció una medida similar el 28 de abril, el mismo día en que se renovó por un nuevo año el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, MINURSO. De acuerdo con dirigentes del movimiento saharauí, la decisión de replegar sus fuerzas respondió a la intención de facilitar una salida negociada al conflicto y se adoptó en respuesta a los llamamientos de países amigos. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la valoraron como una medida de construcción de confianza y buena voluntad. El POLISARIO insistió, en todo caso, que la solución de la crisis requería necesariamente un proceso de descolonización en el Sáhara Occidental y puso condiciones para mantener su repliegue, incluyendo una salida total de las fuerzas marroquíes y progresos demostrables en el proceso de negociación. La situación en Guerguerat permaneció así en relativa calma y libre de actores armados durante 2017 hasta finales de diciembre, cuando una pequeña delegación del POLISARIO estableció una especie de puesto de monitoreo. En junio, el secretariado del Consejo de Seguridad de la ONU había enviado notas verbales a Marruecos y el Frente POLISARIO proponiéndoles abordar el tema del cese el fuego, por ejemplo, a través del despliegue de una misión de personas expertas.

Otro de los hechos relevantes durante 2017 fue el cambio del enviado especial de la ONU para el Sáhara, tras la dimisión del estadounidense Christopher Ross.

El diplomático, que desempeñaba el cargo desde 2009, había enfrentado una creciente hostilidad por parte de las autoridades marroquíes, que habían advertido que no pretendían celebrar nuevas reuniones con el enviado especial. El secretario general de la ONU designó como sucesor de Ross al ex presidente de Alemania, Horst Köhler. Dirigentes saharauis expresaron su disposición a cooperar con el nuevo enviado especial y Rabat también se mostró dispuesto a colaborar con el nuevo enviado. Así, entre el 15 y el 24 de octubre, Köhler realizó su primera visita a la región y se reunió con las máximas autoridades de Marruecos, el Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania. En Rabouni, Köhler también se reunió con jóvenes y mujeres saharauis. Durante el último trimestre del año el enviado especial también mantuvo contactos con los países miembros del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental (Francia, Rusia, España, Reino

Unido y EEUU). Antes de finalizar 2017 Köhler propuso a las partes en conflicto y a los países vecinos mantener encuentros bilaterales para consultas en profundidad que fueron aceptadas por todos los interlocutores y que se iniciaron en enero de 2018.

Respecto a los hechos de 2017, cabe destacar también que durante su discurso con motivo del 42 aniversario de la Marcha Verde, en noviembre, el monarca marroquí declaró que el compromiso de su país en lo referente al Sáhara Occidental se basaba en cuatro principios: 1) rechazo a cualquier solución que no suponga la soberanía total de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y su propuesta de autonomía, 2) involucrar a todas las partes que comparten responsabilidades en el conflicto en una solución final -Rabat es partidario de involucrar a Argelia de manera más directa-, 3) reconocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU como único ente responsable de supervisar el proceso, y 4) rechazo a las “propuestas obsoletas” que desviaban la atención de los términos de referencia que, según Marruecos, deben regir un acuerdo. Dirigentes del Frente POLISARIO consideraron que el discurso del rey evidenciaba que Marruecos estaba desligándose de sus compromisos en el marco del proceso de paz. Otro de los hechos significativos de 2017, ocurrido justo al comenzar el año, fue la decisión de la UA de readmitir a Marruecos tras haberse mantenido al margen de la organización regional durante más de tres décadas. La UA expresó su deseo de que la membresía de Marruecos en la entidad pudiera facilitar una solución del contencioso sobre el Sáhara Occidental. Rabat resolvió abandonar la UA en 1984 después de la decisión de la organización de incorporar a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La incorporación de Marruecos -que supuso obtener el apoyo de 39 de los 54 países que conforman la organización- fue considerada como una derrota diplomática para Argelia. Desde el Frente POLISARIO aseguraron que Marruecos fue admitido bajo la

premisa de que la RASD continuaría formando parte de la organización y subrayaron que los estatutos de la UA no permiten ni la suspensión ni la expulsión de ninguno de sus integrantes. Sin embargo, análisis destacaron que a pesar de haberse reintegrado en la UA sin condiciones Marruecos no ha cambiado su política sobre el Sáhara Occidental, por lo que existe la posibilidad de que se abra una lucha permanente en el seno de la organización panafricana. De hecho, Marruecos optó por no asistir a la reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la UA celebrado en marzo para valorar la situación del Sáhara Occidental.

En otros ámbitos, cabe mencionar que en abril de 2017 Marruecos accedió al retorno de 17 de los integrantes de la MINURSO que no habían podido retomar sus tareas desde marzo de 2016, cuando Rabat y el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon protagonizaron una disputa por declaraciones del diplomático en las que aludió a la “ocupación” (marroquí) del Sáhara Occidental. El episodio derivó entonces en la expulsión de la mayor parte del componente civil de la misión. Además, cabe destacar que el programa de medidas de confianza, suspendido a mediados de 2014, continuó bloqueado. Así, según cifras de ACNUR, más de 12.000 personas continuaban esperando la posibilidad de beneficiarse con visitas familiares. En materia de derechos humanos, Marruecos continuó retrasando la visita del relator especial sobre torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, originalmente programada para abril de 2015. Asimismo, se continuó denunciando la falta de investigación sobre las denuncias de abusos contra saharauis, así como las dificultades para que ONG saharauis de derechos humanos desarrollen sus actividades y el acoso a activistas. Rabat también mantuvo su política de expulsión de extranjeros -incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos- de los territorios que considera como parte de sus “provincias del sur”.

